

APPENDIX A:
JUDGMENT OF THE COURT OF APPEALS OF PUERTO RICO
SPANISH-ENGLISH

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE APELACIONES
PANEL ESPECIAL

DR. LUIS S. ARANA
SANTIAGO
RECURRENTE(S)

(KLRA202100375)

DR. LUIS TAPIA MALDONADO,
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
DE PUERTO RICO EN UTUADO;
DR. JORGE HADDOCK
ACEVEDO,
PRESIDENTE DE LA UPR;
JUNTA DE GOBIERNO DE LA
UPR
RECURRIDA(S)

*Revisión de Decisión
Administrativa*
procedente de la
Universidad
de Puerto Rico,
Junta de Gobierno
de la UPR

Civil Núm.:
JG 20-08
Sobre:
Acción Disciplinaria

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la Jueza Rivera Marchand, la Juez Barresi Ramos y la Jueza Mateu Meléndez

Barresi Ramos, Juez Ponente

S E N T E N C I A

En San Juan, Puerto Rico, hoy día 8 de junio de 2023.

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el **doctor Luis Arana Santiago** (doctor **Arana Santiago**), por derecho propio, mediante recurso instado el 14 de julio de 2021. En su escrito, nos solicita que revisemos la *Decisión de Apelación de la Junta de Gobierno (Decisión)* emitida el 5 de mayo de 2021 por la

Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (Junta de Gobierno).¹

Mediante esta *Decisión*, la **Junta de Gobierno** declaró sin lugar la apelación y confirmó la determinación del doctor **Jorge Haddock Acevedo**, presidente de la **Universidad de Puerto Rico (UPR)**, decretada el 8 de octubre de 2020. Esto es, se avaló el dictamen del doctor **Luis A. Tapia Maldonado**, Rector de la **Universidad de Puerto Rico en Utuado (UPRU)**, intimada el 20 de diciembre de 2019, en la cual se resolvió destituir de su puesto como profesor al doctor **Arana Santiago** y separarlo de todo vínculo con la **UPR**.

Exponemos el trasfondo fáctico y procesal que acompaña a la presente controversia.

El doctor **Arana Santiago** se desempeñaba como catedrático en la **UPRU**. Durante el segundo semestre del año académico 2017-2018, impartió el curso de MATE 3012.² El 23 de mayo de 2018, en horas de la tarde, varios estudiantes matriculados en la aludida clase acudieron a la Oficina de la Procuraduría Estudiantil (PE) donde presentaron una queja sobre el desempeño del doctor **Arana Santiago** en el salón de clases. La PE instruyó a los estudiantes a presentar por escrito sus reclamos en el Decanato de Asuntos Académicos.³ Al día siguiente, en horas de la mañana, los estudiantes acudieron a las Oficinas del Decanato de Asuntos Académicos y presentaron una queja por escrito ante la señora Vivian Vélez

¹ Esta determinación fue notificada y archivada en autos el 13 de mayo de 2021. Véase Apéndice, págs. 337- 339.

² Surge del expediente que este semestre comenzó durante el mes de febrero 2018, toda vez que se atrasó su inicio debido al Huracán María.

³ Véase Apéndice, pág. 353.

Vera (Decana Vélez Vera), Decana Interina.⁴

Ante la reclamación de los alumnos, la Decana Vélez Vera citó a los estudiantes para una reunión junto con la señora María C. Rodríguez Sierra Decana de Estudiantes (Decana Rodríguez Sierra).⁵ Los estudiantes en forma grupal fueron consistentes en expresar que el doctor **Arana Santiago**: (1) iba a fracasar al grupo entero en el curso; (2) le hacía comentarios despectivos al grupo sobre su desempeño en el curso; y, (3) hacía comentarios impropios, con connotaciones fuertes hacia la estudiante Génesis Vélez Feliciano. Además, fueron enfáticos en solicitar que se interviniera en el asunto y se tomaran medidas prioritarias o cautelares. Como parte de la mencionada reunión, se levantó una minuta.⁶

Ese mismo día, la Decana Vélez Vera y la Decana Rodríguez Sierra se reunieron con la estudiante Génesis Vélez Feliciano en privado. Esta se expuso sobre la conducta inapropiada del doctor **Arana Santiago** hacia su persona.⁷ Particularmente, expresó que el doctor **Arana Santiago** le comentaba frecuentemente que ella tenía apariencia de gustarles los hombres fuertes y los carros caros; y apariencia de gustarle las fiestas. Manifestó que, en una ocasión, el doctor **Arana Santiago**, acercó su rostro al de ella. Añadió que continuamente

⁴ Los estudiantes, expresaron lo siguiente:

“El ambiente en el salón de clases es totalmente incómodo debido a comentarios fuera de lugar e insinuaciones hacia las damas del salón, además recibimos comentarios despectivos al grupo en general. La compañera Génesis Vélez ha sido la más perjudicada con esta situación debido a los constantes comentarios y gestos hacia su persona, haciéndola sentir incómoda delante del grupo. Nos preocupa sobre manera esta situación debido a que hay graduandos en el grupo y compañeros que necesitan como requisito esta clase para el traslado a otro recinto. Esperamos que con la mayor brevedad posible se trabaje con la situación y se tomen las acciones necesarias (sic)”. Véase Apéndice, pág. 6.

⁵ *Íd.*, pág. 354. Véase, además, transcripción de la Prueba oral (TPO) de 31 de octubre de 2021, testimonio de la Decana Vélez Vera, págs. 38-39.

⁶ Véase Apéndice, págs. 7- 9.

⁷ *Íd.*, págs. 13- 15.

éste le expresaba que si creía que su novio le pudiera resolver los problemas matemáticos en su mente. La joven Vélez Feliciano destacó que los gestos y expresiones del doctor **Arana Santiago** no eran deseados. A su vez, expuso que sentía miedo de expresarle personalmente al doctor **Arana Santiago** su malestar por dichas actitudes hacia su persona. Exteriorizó tener interés en presentar una querrela formal.

El mismo día, en horas de la tarde, ambas Decanas se reunieron con el doctor **Arana Santiago** y le informaron que el propósito de dicha reunión era exponer las quejas recibidas de los estudiantes sobre sus manifestaciones hacia la estudiante Vélez Feliciano así como sus comentarios dirigidos al resto del grupo de estudiantes, que crearon un ambiente hostil en el salón de clases.⁸ Por su parte, la Decana Vélez Vera le explicó al doctor **Arana Santiago** que le entregaría copia de una minuta con un resumen de lo ocurrido en la reunión para que tuviera oportunidad de defenderse ante las mencionadas quejas.⁹

Esa misma noche, las Decanas se comunicaron con la señora Marisol Díaz Ocasio, Procuradora Estudiantil (PE), para informarle sobre los eventos acaecidos entre el doctor **Arana Santiago** y los estudiantes.¹⁰

Así las cosas, el 4 de junio de 2018, las Decanas, el profesor Jorge TorresBauzá, director del Departamento de Ciencias Naturales, y supervisor inmediato del doctor **Arana Santiago**, se reunieron con la estudiante Vélez Feliciano y los otros alumnos.

⁸ *Íd.*, pág. 356. Véase, además, transcripción de la prueba oral (TPO) de 31 de octubre de 2019, testimonio de la Decana Vélez Vera, pág. 45.

⁹ *Íd.*

¹⁰ Transcripción de prueba oral (TPO) de 1 de noviembre de 2019, testimonio de la Procuradora Estudiantil Díaz Ocasio (PE), pág. 36.

La joven Vélez Feliciano prestó una declaración en contra del doctor **Arana Santiago** que fue firmada por la PE, las Decanas y el profesor Torres Bauzá.¹¹ Ese mismo día, el profesor Torres Bauzá se reunió con el doctor **Arana Santiago** y le entregó personalmente una copia de la declaración de la estudiante Vélez Feliciano.¹² En la reunión, se le advirtió sobre su derecho a presentar su posición o defensas sobre la queja.¹³ Luego de leerla, el doctor **Arana Santiago** negó los comentarios plasmados en la misma.¹⁴

El 5 de junio de 2018, la estudiante Vélez Feliciano suscribió un Formulario de Título IX sobre hostigamiento sexual contra el doctor **Arana Santiago**.¹⁵ Días después, el 28 de junio de 2018, el Rector de la **UPRU** se reunió con doctor **Arana Santiago** y le reiteró que era objeto de una investigación debido a una querrela sometida por la estudiante Vélez Feliciano.¹⁶ A su vez, le recordó que en una ocasión previa fue hallado responsable en una investigación sobre hostigamiento sexual en la institución universitaria. Debido a ese caso, el doctor **Arana Santiago** suspendido por seis (6) meses.¹⁷

El 11 de julio de 2018, la estudiante Vélez Feliciano presentó una declaración jurada sobre los actos cometidos del doctor **Arana Santiago**.¹⁸

¹¹ Véase Apéndice, pág. 11.

¹² *Íd.*, pág. 358.

¹³ *Íd.*

¹⁴ *Íd.*

¹⁵ *Íd.*, págs. 17- 18. En este documento, la joven Vélez Feliciano alegó que fue removida del salón de clases y estaba interesada en que se amonestara al doctor **Arana Santiago** para que este tipo de conducta no volviera a ocurrir.

¹⁶ *Íd.*, pág. 23.

¹⁷ *Íd.*, pág. 360. Véase, además, la *Contestación a la Notificación del 16 de diciembre de 2018 Sobre Formulación de Cargos por Violación a las Políticas Institucionales sobre Hostigamiento Sexual*, presentada por el doctor **Arana Santiago**, a la pág. 28.

¹⁸ Véase Apéndice, págs. 20- 21.

El 8 de agosto de 2018, el doctor **Arana Santiago** se acogió a una licencia por enfermedad. Posteriormente, el 16 de agosto de 2018, la PE y las Decanas, rindieron un informe al Rector Interino de la institución en torno a la querrela de hostigamiento sexual en contra del doctor **Arana Santiago**.¹⁹ En el referido escrito, concluyeron que el doctor **Arana Santiago** incurrió en actos constitutivos de hostigamiento sexual bajo la modalidad de ambiente hostil prohibido bajo el Título IX. A su vez, recomendaron que, con base en la totalidad de la evidencia recopilada, se iniciara una investigación sobre el asunto y se hiciera cumplir con la Política Institucional contra el Hostigamiento Sexual.

Finalmente, el 12 de octubre de 2018, el doctor José L. Heredia Rodríguez, en calidad de Rector Interino de la **UPRU**, suscribió la *Formulación de Cargos* contra el doctor **Arana Santiago**.²⁰ Los cargos que se le formularon imputaban violaciones a los Artículos VIII(A)(1), (A)(2), (A)(3), (B)(1) y (B)(2) de la *Política Institucional contra el Hostigamiento Sexual en la UPR*, Certificación Número 130 (2014-2015) y las secs. 35.2.8 y 35.2.19 del Reglamento General de la UPR. La misma resumía los hechos que dieron base a los cargos, la prueba testifical a presentarse por la **UPR**; la cual consistía en los testimonios de los estudiantes, el derecho que le asistía al doctor **Arana Santiago** de estar representado legalmente durante el proceso; las sanciones disciplinarias que podrían imponérsele de probarse los cargos imputados en su

¹⁹ *Íd.*, págs. 1- 2. Junto con su informe incluyeron los siguientes documentos, en apoyo a las alegaciones: 1) Referido del Caso de Título IX, 2) la queja por escrito de los estudiantes del curso MATE 3012, 3) las minutas de las reuniones con los estudiantes, la joven Génesis Vélez Feliciano y el registro de asistencia de ambas reuniones, 4) la declaración de la joven Vélez Feliciano, 5) el formulario de Título IX, 6) declaración jurada de la estudiante Vélez Feliciano, y 6) copia del registro de asistencia de la reunión entre el doctor **Arana Santiago** y la Decana Vélez Vera.

²⁰ Véase Apéndice, págs. 24- 33. El referido escrito fue notificado al doctor **Arana Santiago**, el 16 de diciembre de 2018.

contra; y el término de quince (15) días para contestar las alegaciones. Del mismo modo, se le informó al doctor **Arana Santiago** que el caso había sido referido al Oficial Examinador. También, la misiva indicaba que con la formulación de cargos se iniciaba el proceso administrativo *formal*.

Por su parte, el doctor **Arana Santiago** presentó *Contestación a la Notificación del 16 de diciembre de 2018 Sobre Formulación de Cargos por Violación a las Políticas Institucionales sobre Hostigamiento Sexual*. En su alegación responsiva, negó los hechos imputados y solicitó que los cargos fueran desestimados.²¹ Además, arguyó que hubo irregularidades en el proceso informal establecido en el Artículo IX de la Certificación Núm. 130. Entre estas, que: 1) la PE no le informó que estaba bajo investigación; 2) no se le permitió ofrecer su versión de los hechos y presentar sus defensas afirmativas y atenuantes; 3) no se le tomó declaración jurada; 4) no participó en la investigación de la PE; y 5) no se le dio la oportunidad de examinar el informe que la PE le rindió al Rector Interino de la **UPRU**, entre otras.

Luego de varios trámites procesales, los días 30 y 31 de octubre de 2019, y el 1 de noviembre de 2019, se celebraron las audiencias evidenciarias ante el Oficial Examinador. En dichas audiencias, la **UPRU** presentó el testimonio de tres (3) de

²¹ Véase Apéndice, págs. 34- 42. El doctor **Arana Santiago** presentó una reclamación ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico. Véase: 19-1762 (RAM) caso en el cual solicitó infructuosamente la recusación del Juez que atendía el caso ante dicho tribunal por este haber representado legalmente a la **UPR** en un caso anterior no relacionado; posteriormente solicitó el remedio de Injunction con el fin de detener el proceso de investigación administrativa en su contra. Finalmente, el 3 de junio de 2021, en el caso 19-2128, la Jueza Silvia Carreño-Coll emitió una *Opinión y Orden* mediante la cual declaró Con Lugar la *Moción de Desestimación* presentada por los señores Tapia Maldonado, Heredia Rodríguez y otros; y desestimó el caso ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico por el mismo estar atendándose aún en el Tribunal Estatal.

los estudiantes del doctor **Arana Santiago**: David A. Ureña Negrón, Esteban J. Tellado Zequeira, y Jann Romero Santiago. También declaró la Decana Vélez Vera, la PE, y el director del Departamento de Ciencias Naturales, supervisor inmediato del doctor **Arana Santiago**. Por su parte, el doctor **Arana Santiago**, no presentó prueba testifical. Las partes también presentaron prueba documental.

El 26 de noviembre de 2019, el Oficial Examinador emitió su *Informe del Oficial Examinador (Informe)* conteniendo sus determinaciones de hecho, conclusiones de derecho y recomendaciones para que se desestimaran los cargos imputados al doctor **Arana Santiago**.²² Particularmente, resolvió que el proceso informal establecido en la Certificación Núm. 130 no se llevó a cabo de manera adecuada ni oportuna. Además, estableció que los estudiantes atribuyeron sus malas notas en el curso al doctor **Arana Santiago** por no haber cumplido con su rol de enseñanza y no a su conducta o expresiones hacia la estudiante Vélez Feliciano. Asimismo, expresó que no surgía del expediente que la alumna Vélez Feliciano indicara que las actitudes del doctor **Arana Santiago** interfirieron irrazonablemente con sus estudios. A su vez, concluyó que:

Tampoco entendemos que la conducta y las expresiones realizadas del Querellado en el salón de clases puede razonablemente entenderse como que creara un ambiente suficientemente hostil, intimidante u ofensivo, que constituyera hostigamiento sexual. Aunque entendemos que la conducta y expresiones del Querellado podrían considerarse de mal gusto y/o no apropiadas para un salón de clases, opinamos que estas no son lo suficientemente serias o de connotación sexual como para puedan ser percibidos como hostigamiento sexual por cualquier otro estudiante razonable. Apéndice, págs. 109-110.

²² Véase Apéndice, págs. 69-111.

El 20 de diciembre de 2019, el doctor Luis A. Tapia Maldonado, Rector, dictaminó su *Resolución* en la cual acogió las determinaciones de hechos contenidas en el *Informe*.²³ A su vez, emitió determinaciones adicionales de hechos probados, y concluyó que el doctor **Arana Santiago** incurrió en violaciones a los Artículos VIII (A)(3) y (B)(2) de la Política contra el Hostigamiento Sexual. Precisó que las conclusiones formuladas por el Oficial Examinador eran contrarias a Derecho y a la Política contra el Hostigamiento Sexual de la **UPR** y los reglamentos institucionales. En su análisis, el Rector concluyó que:

Al examinar en conjunto la totalidad de los hechos relatados en unión a los parámetros subjetivo y objetivo establecidos, podemos concluir que la conducta del querellado fue una explícita e implícita, tanto verbal como física, que creó un ambiente intimidante, hostil, y ofensivo en el salón de clases, como fue percibido y reiterado por los estudiantes y por la estudiante Génesis Vélez Feliciano, por lo que constituyó un comportamiento discriminatorio y constitutivo de hostigamiento sexual. Apéndice, págs. 143-144.

Así las cosas, decretó la destitución inmediata del doctor **Arana Santiago** como catedrático de la **UPR** y le inhabilitó para servir a la institución.

Inconforme con dicha determinación, el doctor **Arana Santiago** presentó una *Apelación Administrativa* ante la Oficina del Presidente de la **UPR**.²⁴ En su escrito, reiteró que la **UPRU** incumplió con el procedimiento instituido bajo la Certificación Núm. 130 y no le dieron participación alguna en la etapa informal de la investigación. A su vez, expuso que no tuvo la oportunidad de contrainterrogar a la estudiante Vélez Feliciano, pues esta no compareció a ninguna audiencia.

²³ *Íd.*, págs. 112-146.

²⁴ Véase Apéndice, págs. 148- 167.

El 8 de octubre de 2020, el doctor Jorge Haddock Acevedo, Presidente de la UPR, pronunció *Resolución* en la cual se adoptó el *Informe y Recomendaciones del Oficial Examinador* y declaró no ha lugar la apelación.²⁵ Referente al mencionado *Informe*, se emitieron determinaciones de hechos adicionales. Entre estas que el doctor **Arana Santiago** recibió notificación oportuna de la existencia de una investigación en su contra.

Consecuentemente, el 31 de octubre de 2020, el doctor **Arana Santiago** apeló ante la **Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (Junta de Gobierno)**.²⁶ El 29 de abril del 2021, la **Junta de Gobierno** determinó declarar sin lugar la apelación y confirmó la decisión del doctor Haddock Acevedo, presidente de la **UPR**.²⁷ Del mismo modo, indicó que su determinación está fundamentada en el *Informe de la Oficial Examinadora* rendido el 16 de marzo de 2021. En el referido escrito, decretó que el hecho de que la estudiante Vélez Feliciano no declarara en la audiencia no impidió que la **UPRU** probara su caso en su totalidad. Expuso que:

[...]UPRU no podía tolerar la conducta del Apelante ni mucho menos arriesgarse a que la misma se agravara o se volviera a repetir, máxime cuando ya, en el pasado, el Apelante había tenido un incidente anterior por actos de hostigamiento sexual como resultado del cual fue suspendido de empleo y sueldo, por seis (6) meses, de la Institución. Apéndice, pág. 401.

Asimismo, concluyó que el doctor **Arana Santiago** incurrió en conducta inmoral, ofensiva y humillante en contra de la estudiante Vélez Feliciano y en

²⁵ *Íd.*, págs. 188- 232.

²⁶ *Íd.*, págs. 233-336.

²⁷ El 13 de mayo de 2021, se notificó la decisión de la **Junta de Gobierno**. Véase, Apéndice, págs. 337- 406.

violación a los principios constitucionales del derecho a estudiar, así como a la política pública de la Ley contra el Hostigamiento Sexual en las Instituciones Educativas, la Ley de la Universidad, los reglamentos y procedimientos universitarios pertinentes. Dispuso que era justificada la destitución del doctor **Arana Santiago** de su puesto en la institución, así como su separación definitiva de todo vínculo con la universidad.

El 1 de junio de 2021, el doctor **Arana Santiago** presentó una reconsideración.²⁸ Sin embargo, la **Junta de Gobierno** no lo atendió.

Aún insatisfecho, el 14 de julio de 2021, el doctor **Arana Santiago** instó un recurso de revisión administrativa ante este Tribunal de Apelaciones. En el mismo, señala el(los) siguiente(s) error(es):

Erró el Dr. Luis Tapia Maldonado al haber catalogado las conductas alegadas en la querrela administrativa como conductas de carácter sexual. Por consiguiente, erró la UPRU al haber emprendido una investigación por hostigamiento sexual contra el promovente.

Erró el Dr. Luis Tapia Maldonado al concluir que se había cumplido con el aspecto subjetivo de la investigación, según fue establecido por el Honorable Tribunal Supremo en el caso normativo UPR-Aguadilla v. José Lorenzo Hernández, 2012 TSPR 57.

Erró el Dr. Luis Tapia Maldonado al haber indicado que se había cumplido con el debido proceso de ley.

Erró el rector al indicar que se había cumplido con el protocolo establecido en la Certificación 130.

Erró el Dr. Luis Tapia Maldonado en su aquilatamiento de la prueba testifical. Erró el oficial examinador parcialmente en su

²⁸ Véase Apéndice, págs. 407-429.

aquilatamiento de la prueba testifical.

Erró el Dr. Luis Tapia Maldonado al no percatarse de la mendacidad de Vivian Vélez Vera y Marisol Díaz Ocasio.

Erró el Dr. Luis Tapia Maldonado al haber hallado culpable al promovente de haber infligido las políticas institucionales contra hostigamiento sexual en la Universidad de Puerto Rico y por la comisión de actos inmorales y, en consecuencia, haberlo destituido.

Erró el rector en cuanto al derecho aplicable.

Erró el Dr. Luis Tapia Maldonado en haber continuado con una querrela administrativa que evidentemente era falsa.

Erró el Dr. Luis Tapia Maldonado al no haber considerado en su *Resolución* el cambio ilícito de notas a los estudiantes del curso Mate 3012, m23.

Erró el Dr. Luis Tapia Maldonado al haber destituido al promovente sin contar con el quantum de prueba requerido.

Erró la UPRU al haber objetado el testimonio de Vivian Vélez Vera y Marisol Díaz Ocasio en cuanto al cambio ilícito de notas a los estudiantes del curso Mate 3012, m23. Erró el oficial examinador al haber declarado con lugar dicha objeción.

Erró el Dr. Luis Tapia Maldonado al haber destituido al promovente habiéndose cometido durante el proceso administrativo los errores comprendidos del #1 al #12 que hemos expresado y discutido anteriormente.

El 18 de abril de 2022, la UPRU presentó su Alegato en oposición.

Evaluated concienzudamente el expediente del caso, contando con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, y habiendo estudiado minuciosamente la transcripción de la prueba oral estipulada, nos encontramos en posición de resolver. Presentamos las normas de derecho pertinentes a la(s) controversia(s) planteada(s).

Debido a que los señalamientos de error versan sobre el mismo derecho aplicable, procederemos a sintetizarlos en dos (2) asuntos claves, y a discutirlos en conjunto. Esto es: (1) si al doctor **Arana Santiago** se le violentó su derecho al debido proceso de ley durante el proceso administrativo en su contra; y, (2) si la decisión de destituirlo de su puesto como profesor en la **UPRU**, tomada por el doctor **Tapia Maldonado**, fue una correcta en derecho.

- A -

La *Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico* (LPAU) provee un cuerpo de normas mínimas para regir los procesos de adjudicación y reglamentación en la administración pública.²⁹ Su sección 4.1 instituye la *revisión judicial* por este Tribunal de Apelaciones de las determinaciones finales de las agencias.³⁰

La *revisión judicial* tiene como propósito limitar la discreción de las agencias y asegurarse de que estas desempeñen sus funciones conforme a la ley.³¹ El criterio rector al momento de pasar juicio sobre una decisión de un foro administrativo es la razonabilidad de la actuación de la agencia.³² Nuestra evaluación de la decisión de una agencia se circunscribe, entonces, a determinar si esta actuó de forma arbitraria, ilegal o irrazonable, o si sus acciones constituyen un abuso de discreción.³³

²⁹ Conocida como la Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, según enmendada, 3 LPRA §§ 9601- 9713. *Saldaña Egozcue v. Junta*, 201 DPR 615, 621 (2018).

³⁰ 3 LPRA § 9671.

³¹ *Torres Acosta v. Junta Examinadora*, 161 DPR 696, 707 (2004).

³² *Otero v. Toyota*, 163 DPR 716, 727 (2005). D. Fernández Quiñones, *Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme*, 2da ed., Bogotá, Ed. Forum, 2001, pág. 543.

³³ *Torres Acosta v. Junta Examinadora*, *supra*, pág. 708

No obstante, las decisiones de los organismos administrativos especializados gozan de una presunción de legalidad y corrección, por lo que sus conclusiones e interpretaciones merecen gran consideración y respeto.³⁴ Por ello, al ejecutar nuestra función revisora, este Tribunal está obligado a considerar la especialización y experiencia de la agencia, distinguiendo entre cuestiones de interpretación estatutaria —sobre las que los tribunales son especialistas— y cuestiones propias de la discreción o pericia administrativa.³⁵

El alcance de la *revisión judicial* de las determinaciones administrativas se ciñe a decidir lo siguiente: (1) si el remedio concedido por la agencia fue el apropiado; (2) si las determinaciones de hecho de la agencia están basadas en *evidencia sustancial* que obra en el expediente administrativo, y (3) si las conclusiones de derecho fueron las correctas.³⁶

En cuanto a las determinaciones de hechos, estas serán sostenidas por los tribunales si están respaldadas por *evidencia sustancial* que surja del expediente administrativo considerado en su totalidad.³⁷ *Evidencia sustancial* es aquella relevante que una mente razonable puede aceptar como adecuada para sostener una conclusión.³⁸ Debido a la presunción de regularidad y corrección que cobija a las decisiones de las agencias administrativas, quien alegue ausencia de *evidencia*

³⁴ *García Reyes v. Cruz Auto Corp.*, 173 DPR 870, 891 (2008); *Murphy Bernabe v. Tribunal Superior*, 103 DPR 692, 699 (1975).

³⁵ *Adorno Quiles v. Hernández*, 126 DPR 191, 195 (1990).

³⁶ Sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA § 9675; *Torres Rivera v. Policía de PR*, 196 DPR 606, 627 (2016).

³⁷ *Asociación Vecinos del Hospital San Jorge v. United Medical Corp.*, 150 DPR 70, 75 (2000).

³⁸ *Otero v. Toyota*, *supra*, pág. 728.

sustancial debe presentar prueba suficiente para derrotar dicha presunción.³⁹ Para ello “tiene que demostrar que existe otra prueba en el expediente que reduzca o menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, hasta el punto de que no se pueda concluir que la determinación de la agencia fue razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba que tuvo ante su consideración”.⁴⁰ A esto se le conoce como la norma de la *evidencia sustancial*, con lo cual se persigue evitar sustituir el criterio del organismo administrativo en materia especializada por el criterio del tribunal revisor.⁴¹ Por lo tanto, aun cuando exista más de una interpretación razonable de los hechos, el tribunal debe dar deferencia a la agencia, y no sustituir su criterio por el de esta.⁴²

De otro lado, las conclusiones de derecho de la agencia son revisables en todos sus aspectos, sin sujeción a norma o criterio alguno.⁴³ Aun así, debemos dar deferencia a las interpretaciones que los organismos administrativos hacen de las leyes y reglamentos que administran.⁴⁴ Ante ello, “[a]un en casos dudosos en que la interpretación de la agencia no sea la única razonable, la determinación de la agencia merece deferencia sustancial”.⁴⁵

En suma, si la decisión recurrida es razonable y se sostiene en la *evidencia sustancial* que obra en el expediente administrativo, procede su confirmación. Por el contrario, los tribunales revisores podemos intervenir con la decisión recurrida

³⁹ *Pacheco Torres v. Estancias de Yauco, SE*, 160 DPR 409, 431 (2003).

⁴⁰ *Gutiérrez Vázquez v. Víctor Hernández*, 172 DPR 232, 244 (2007).

⁴¹ *Pacheco Torres v. Estancias de Yauco, SE, supra*, pág. 432.

⁴² *Íd.*

⁴³ *Rebollo v. Yiyi Motos*, 161 DPR 69, 77 (2004).

⁴⁴ *Torres Santiago v. Departamento de Justicia*, 181 DPR 969, 1002 (2011).

⁴⁵ *Íd.*

cuando no está basada en *evidencia sustancial*, o cuando la actuación es arbitraria, irrazonable o ilegal, o cuando afecta derechos fundamentales.⁴⁶

En cuanto a la aplicabilidad de las Reglas de Evidencia en los procesos adjudicativos de las agencias administrativas, la LPAU y su jurisprudencia interpretativa han establecido que dichas normas no se incluyen, como regla general, pues se persigue que lo justo impere sin las trabas procesales de los tribunales de justicia (citas omitidas).⁴⁷ Nuestro ordenamiento jurídico administrativo propicia a que estos procesos sean ágiles y sencillos con el fin de una solución rápida, justa y económica.⁴⁸

- B -

La Carta de Derechos de nuestra Constitución establece que, “[n]inguna persona será privada de su libertad o propiedad sin el debido proceso de ley, ni se negará a persona alguna en Puerto Rico la igual protección de las leyes”.⁴⁹ Del mismo modo, la Constitución de los Estados Unidos dispone que, “[n]inguna persona [...] será privada de su vida, de su libertad o de su propiedad, sin el debido proceso de ley.”⁵⁰ A su vez, su Enmienda 14 establece que, [n]ingún estado privará a persona alguna de su vida, de su libertad o de su propiedad sin el debido procedimiento de ley, ni negará a nadie, dentro de su jurisdicción, la igual protección

⁴⁶ *Junta de Planificación v. Cordero Badillo*, 177 DPR 177, 187 (2009).

⁴⁷ *Otero v. Toyota*, *supra*, pág. 733, citando a *Martínez v. Tribunal Superior*, 83 DPR 717, 720 (1961). Véase, además, 3 LPRA sec. 2163.

⁴⁸ *Íd.* En *Otero v. Toyota*, la agencia administrativa admitió en evidencia un informe que halló los desperfectos en un vehículo de motor, el cual era prueba de referencia. El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que en los procesos administrativos no aplican las reglas de evidencia y el foro administrativo podía admitirlo. Además, concluyó que el aludido informe corroboró los defectos que el técnico de la agencia le encontró al automóvil concernido.

⁴⁹ Art. II, sec. 7, Const. ELA.

⁵⁰ Emnda. V, Const. EE. UU.

de las leyes”.⁵¹ Las antedichas cláusulas constitucionales fueron promulgadas con el objetivo de prevenir que el gobierno abuse de sus poderes y los utilice como instrumentos de opresión para con la ciudadanía.⁵² El postulado del debido proceso de ley ha sido definido como el “derecho de toda persona a tener un proceso justo y con todas las garantías que ofrece la ley, tanto en el ámbito judicial como en el administrativo”.⁵³ Este derecho consagrado constitucionalmente opera en dos (2) vertientes: la procesal y la sustantiva.⁵⁴ En su ámbito sustantivo, esta doctrina procura proteger y salvaguardar los derechos fundamentales de las personas.⁵⁵ Por otro lado, la vertiente procesal, “le impone al Estado la obligación de garantizar que la interferencia con los intereses de libertad y propiedad del individuo se haga a través de un procedimiento que sea justo y equitativo”.⁵⁶ En el aspecto procesal, se reconocieron varias garantías que componen el debido proceso de ley. Entre ellas se encuentran: (1) la concesión de una vista previa; (2) una notificación oportuna y adecuada; (3) el derecho a ser oído; (4) el derecho a confrontarse con los testigos en contra; (5) el derecho a presentar prueba oral y escrita a su favor; y (6) la presencia de un adjudicador imparcial.⁵⁷ Debido a que los organismos administrativos resuelven controversias que podrían intervenir con intereses propietarios o de libertad de las personas, nuestro ordenamiento jurídico ha extendido las antedichas garantías a los procedimientos administrativos. No obstante, el debido proceso de

⁵¹ Emnda. XIV, Const. EE. UU.

⁵² *Rodríguez Rodríguez v. ELA*, 130 DPR 562, 575 (1992).

⁵³ *Aut. Puertos v. HEO*, 186 DPR 417, 428 (2012).

⁵⁴ *Ind. Emp. A.E. P. v. A.E.P.*, 146 DPR 611, 616 (1998).

⁵⁵ *Íd.*

⁵⁶ *Íd.*

⁵⁷ *Vendrell López v. AEE*, 199 DPR 352, 359 (2017).

ley en el ámbito administrativo es más laxo que en los procedimientos ante los tribunales.⁵⁸ Sobre lo que hemos sido enfáticos es en que, “el procedimiento adjudicativo debe ser uno justo y equitativo”.⁵⁹ La Sec. 3.1 de la LPAU dispone que, al adjudicar una controversia, las agencias deben salvaguardar a las partes los siguientes derechos: (1) notificación oportuna de los cargos o querellas o reclamos en contra de una parte; (2) presentar prueba; (3) adjudicación imparcial, y (4) la decisión sea basada en el expediente.⁶⁰ Lo anterior es un corolario del mencionado derecho al debido proceso de ley garantizado en nuestra Constitución.

- C -

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que los empleados públicos de carrera ostentan un interés propietario sobre sus plazas de trabajo, y, por lo tanto, estos son acreedores de un debido proceso de ley.⁶¹ Dicho esto, en el empleo público, las mencionadas garantías del debido proceso de ley deben ser de aplicación antes de que se pueda ver afectado tanto el salario, como la permanencia del empleado en su puesto.⁶² Estas garantías se concretizan a través de la notificación de la formulación de cargos disciplinarios, la celebración de una vista administrativa formal mediante la cual se le confiera al empleado la oportunidad de ser oído, de examinar la prueba en su contra y presentar prueba a su favor, y en dicha vista la determinación tomada sea basada en el contenido del expediente del

⁵⁸ *Báez Díaz v. ELA*, 179 DPR 605, 623 (2010).

⁵⁹ *Íd.*

⁶⁰ 3 LPRA sec. 9641.

⁶¹ *Torres Solano v. PRTC*, 127 DPR 499 (1990).

⁶² *Íd.*

empleado y emitida por un juez imparcial.⁶³ Ahora bien, “la jurisprudencia constante del Tribunal Supremo de Estados Unidos y la del de Puerto Rico esclara en el sentido de que el ejercicio del derecho de propiedad no es absoluto. Está supeditado a intereses sociales que se agrupan en el concepto de ‘*poder de razón de estado*’ o ‘*police power*’.”⁶⁴

- D -

La *Ley para Prohibir el Hostigamiento Sexual en las Instituciones de Enseñanza*, dispone todo lo relativo al hostigamiento sexual contra estudiantes en instituciones de enseñanza, incluyendo niveles universitarios.⁶⁵ Esta legislación tiene como objetivo prohibir el hostigamiento sexual contra los estudiantes de modo que se salvaguarde un ambiente propicio para su desarrollo personal y aprendizaje.⁶⁶ El aludido estatuto definió el hostigamiento sexual en estas instituciones y reconoció como política pública del Estado velar porque los estudiantes—niños, jóvenes y adultos— tengan el derecho a realizar sus estudios libres de la presión que constituye el hostigamiento sexual.⁶⁷ Ante esto, se le proveyó al estudiante una diversidad de remedios, entre los cuales están, el ser resarcido por daños; ser repuesto en sus estudios; presentar una querrela ante la institución; presentar una demanda civil ante el Tribunal de Primera Instancia

⁶³ *Lupiañez v. Srio. de Instrucción*, 105 DPR 696 (1977).

⁶⁴ Nuestro foro máximo ha definido el Poder de Razón de Estado como, “[a]quel poder *inherente al Estado que es utilizado por la Legislatura* para prohibir o reglamentar ciertas actividades con el propósito de fomentar o proteger la paz pública, moral, salud y *bienestar general de la comunidad*, el cual puede delegarse a los municipios”. *Domínguez Castro v. ELA*, 178 DPR 1, 36 (2010).

⁶⁵ Conocida como la Ley Núm. 3-1998. 3 LPRA secs. 149a y s.s.

⁶⁶ *UPR Aguadilla v. Lorenzo Hernández*, 184 DPR 1001, 1021 (2012).

⁶⁷ 3 LPRA secs. 149a y 149b(a).

(TPD); y solicitar un interdicto de hacer o desistir.⁶⁸

Del mismo modo, esta legislación imputó a las instituciones educativas diferentes obligaciones con el objetivo de prevenir, desalentar y evitar este tipo de conducta, igual que responsabilidad civil por aquellas actuaciones constitutivas de hostigamiento sexual.⁶⁹ En cuanto a las actuaciones que constituyen dicho hostigamiento por parte de su personal docente y no docente, se estableció que estarán incurso en responsabilidad, “independientemente de si los actos específicos objetos de controversia fueron o no prohibidos por la institución de enseñanza, e independientemente de si la institución y el personal docente y no docente de ésta sabía o debía estar enterada de la prohibición de dicha conducta”.⁷⁰ En su Exposición de Motivos, la *Ley para Prohibir el Hostigamiento Sexual en las Instituciones de Enseñanza, supra*, advierte que la conducta de hostigamiento es variada, incluyendo, pero sin limitarse a: hostigamiento de tipo verbal; miradas lascivas; comentarios impropios; roces corporales; presiones e invitaciones con contenido sexual; demandas implícitas de favores sexuales, y ataques físicos.⁷¹

Por su parte, nuestro Tribunal Supremo ha expresado, por su parte, que el hostigamiento sexual puede expresarse en manifestaciones tan sutiles como: piropos, guiñadas e insinuaciones sexuales indeseadas.⁷² En esta conducta se reconoció, entre otras, la modalidad de hostigamiento sexual por ambiente hostil. Esta modalidad se encuentra prohibida por la Ley Núm. 3-1998, *supra*. La misma se

⁶⁸ 3 LPRA sec. 149j.

⁶⁹ 3 LPRA secs. 149e-149i.

⁷⁰ 3 LPRA sec. 149e. *UPR Aguadilla v. Lorenzo Hernández, supra*, págs. 1017-1018.

⁷¹ *Exposición de Motivos de la Ley 3-1998, supra*.

⁷² *Sánchez v. A.E.E.*, 142 DPR 880, 884 (1997).

materializa cuando la conducta sexual de una persona tiene el propósito de amedrentar, amenazar al estudiante o interferir irrazonablemente con el desempeño en sus estudios o cuando la conducta sexual torna el ambiente de estudio en uno intimidante, ofensivo u hostil. Conforme a lo resuelto en *UPR Aguadilla v. Lorenzo Hernández*, supra, y la Ley Núm. 3-1998, supra, “se considerará la totalidad de las circunstancias en que ocurrieron los hechos para determinar si la alegada conducta o acercamiento indeseado constituye hostigamiento sexual”.⁷³ A modo de síntesis, al analizar la conducta en controversia es menester determinar si la conducta puede razonablemente entenderse como que amenaza, amedrenta e interfiere irrazonablemente con los estudios o le crea al estudiante un ambiente suficientemente hostil, intimidante u ofensivo a examinar la totalidad de las circunstancias de cada caso.⁷⁴

Igualmente, la **UPR** cuenta con su propia Política contra el Hostigamiento Sexual. Esta instituye el proceso particular mediante el cual se atenderán querellas de hostigamiento sexual en caso de que la querella dé a lugar una investigación, y esta emita justa causa para la imposición de sanciones disciplinarias al imputado.⁷⁵ Esta política dispone que el proceso inicia con una querella, que, si es presentada por un estudiante, deberá ser remitida a la Oficina del Procurador Estudiantil o al

⁷³ 3 LPRA sec. 149d.

⁷⁴ *UPR Aguadilla v. Lorenzo Hernández*, supra, 1024-1025.

⁷⁵ Véase Artículo IX (C), *Política Institucional contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico*, Certificación Núm. 130 (2014-2015) de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico. Incluso, la mencionada Política permite a la institución continuar con el proceso investigativo, aunque la persona reclamante no participe de la misma o decida retirar la queja. Artículo IX (J). También, faculta a la universidad para adoptar cualquier medida provisional que sea posible y conveniente dentro de este proceso informal para proteger al reclamante con mayor prontitud. Artículo IX (G).

Decanato de Estudiantes. A la parte en contra quien se imputa la querrela, se le informará sobre las alegaciones en su contra; podrá exponer su posición y defensas; pero no será necesario ofrecerle todas las garantías que ofrece el debido proceso de ley que se reconoce en los procesos formales.⁷⁶

Por último, de proceder la formulación de cargos contra la persona querrellada, se dará inicio a un proceso formal. Este proceso formal provee para que la persona querrellada sea notificada de los cargos en su contra; esta pueda contestar la querrela; y se celebre la vista ante un Oficial Examinador que permita a la parte querrellada confrontarse con la prueba en su contra y presentar prueba a su favor.⁷⁷ Esta también insta que, concluida la vista, el Oficial Examinador designado rendirá un informe escrito a la autoridad nominadora de la institución en que la persona querrellada preste servicios y este contendrá: “(1) Relación de los hechos probados; (2) Relación de las conclusiones de derechos formuladas, y (3) Recomendación en torno a la disposición del caso.”⁷⁸ Rendido el Informe del Oficial Examinador, la autoridad nominadora analizará el caso y el informe e impondrá las sanciones disciplinarias que estime pertinentes. La decisión será, por su parte, notificada a la parte querrellada junto con su derecho a apelar.⁷⁹

Particularmente, el Artículo XV de la Certificación Núm. 130 (2014- 2015) sobre la Autoridad Nominadora expone:

⁷⁶ *Íd.*, en el Artículo IX (I) se dispone: Se le dará oportunidad a la persona contra quien se presenta una queja a ser informado sobre las alegaciones en su contra, exponer su posición y defensas. Disponiéndose, sin embargo, que en esta etapa de los procedimientos no se tendrá derecho a las garantías del debido proceso de ley reconocidas en los procedimientos formales. No obstante, podrá asistir a la reunión acompañada de abogado.

⁷⁷ *Íd.*, Artículo XI (A).

⁷⁸ *Íd.*, Artículo XIV.

⁷⁹ *Íd.*, Artículo XV.

La autoridad nominadora de la unidad institucional en que la persona querellada preste servicios o estudie **decidirá el caso luego de evaluar el informe del Oficial Examinador e impondrá la sanción disciplinaria, si alguna, que corresponda**, según dispuesto en el Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico o el Reglamento General de Estudiantes. Notificará su decisión a la persona querellada por escrito y por correo certificado con acuse de recibo y le advertirá de su derecho a apelar la decisión ante el foro y dentro del término señalado por la reglamentación universitaria sobre procedimientos apelativos. La autoridad nominadora informará el resultado final a la alegada víctima por escrito, por correo certificado con acuse de recibo.⁸⁰ (Énfasis Nuestro).

De igual modo, nuestro Más Alto Foro dilucidó que la autoridad nominadora retiene su facultad decisoria, aunque haya designado a un Oficial Examinador para atender el trámite de la querrela y recibir prueba.⁸¹ Al momento de ejercerla no tiene que acoger la totalidad del Informe de dicho juzgador de no considerarlo correcto.⁸² Lo [e]sencial al debido proceso [es que la autoridad nominadora tome] una decisión informada con conocimiento y comprensión de la evidencia ofrecida, sin que importe al caso el medio o mecanismo por el que esa inteligencia de la cuestión debatida llegue a su poder (citas omitidas).⁸³

En relación a las sanciones, el Reglamento General de la **UPR (RG)** permite, con acción disciplinaria, penalizar los actos que bajo los cánones de responsabilidad moral prevalecientes en la comunidad constituyan conducta inmoral, así como violaciones a la Ley de la Universidad, las disposiciones del referido documento y

⁸⁰ *Íd.*

⁸¹ *UPR Aguadilla v. Lorenzo Hernández, supra*, pág. 1011.

⁸² *Íd.*

⁸³ *Íd.*, citando *ADCVP v. Tribunal Superior*, 101 DPR 875, 883 (1974).

otros reglamentos universitarios⁸⁴. La destitución es una de las sanciones correctivas por incumplimiento de dichas normas.⁸⁵ Ahora bien, el RG provee unas penas de disciplina progresiva, que pueden incluir la amonestación verbal, por escrita, suspensión de empleo y sueldo, por un término definido que no exceda de seis (6) meses y por último, la destitución⁸⁶.

- III -

La controversia ante nuestra consideración nos requiere dirimir si al doctor **Arana Santiago**, en primera instancia, se le violentó su derecho al Debido Proceso de Ley en el proceso investigativo, el cual inició con la querrela por hostigamiento sexual formulada en su contra por una de sus estudiantes, y como consecuencia la Universidad lo destituyó de su puesto como profesor en la **UPRU**. En cuanto a este señalamiento de error, no estamos de acuerdo con la postura del doctor **Arana Santiago**. Del expediente ante nuestra consideración, se desprende que durante el proceso investigativo (*informal*) y procedimiento *formal* no se le violentó su derecho al debido proceso de ley. Veamos.

Surge del expediente ante nos, que durante el proceso investigativo *informal* al doctor **Arana Santiago** se le dio la oportunidad de formar parte del proceso; fue notificado de las alegaciones de sus estudiantes; de las alegaciones y la querrela presentada por la estudiante Génesis Vélez Feliciano, así como se le permitió

⁸⁴ Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 160 (2014-2015) Artículo 35, Sec. 35.2.8 y 35.2.19.

⁸⁵ *Íd.*, Sec. 35.3.4.

⁸⁶ *Íd.*, Sec. 35.3.

expresarse y defenderse, tanto de manera verbal como escrita.⁸⁷ Empero, cabe señalar que durante esta etapa de los procedimientos “no se tendrá derecho a las garantías del debido proceso de ley reconocidas en los procedimientos formales”.⁸⁸

Del mismo modo, llegado el proceso adjudicativo *formal*, al doctor **Arana Santiago** se le notificó oportuna y adecuadamente de los cargos en su contra; compareció representado por abogado; participó de la audiencia administrativa; pudo conainterrogar los testigos de la **UPRU**; presentó prueba a su favor; y la decisión tomada de separarlo de su puesto estuvo fundamentada en el expediente. Por lo que, es forzoso colegir que al doctor **Arana Santiago** no se le privó de su derecho al debido proceso de ley.⁸⁹

En cuanto a los otros señalamientos de error imputados al foro administrativo por el doctor **Arana Santiago**, en los cuales alega que la decisión sobre destitución tomada por el Rector de la **UPRU** fue una contraria a Derecho, concluimos que tampoco podemos respaldar su postura. Veamos.

Según pormenorizamos, en los procesos adjudicativos de las agencias administrativas las Reglas de Evidencia no son aplicables, como norma general.

⁸⁷ De acuerdo con los documentos que obran en el expediente y de la transcripción de la prueba oral (TPO). Las Decanas se reunieron con el doctor **Arana Santiago** para informarle que recibieron quejas de los estudiantes concernientes a las manifestaciones que le hacía a la estudiante Génesis Vélez Feliciano y el ambiente que existía en el salón de clases. Véase, Apéndice, págs. 526-528; transcripción de la prueba oral (TPO) de 31 de octubre de 2019, testimonio de la Decana Vélez Vera, págs. 45-46. El profesor Torres Bauzá, director del Departamento de Ciencias Naturales, se reunió también con el doctor **Arana Santiago**, le entregó la declaración que dio la estudiante Vélez Feliciano y le advirtió de su derecho a presentar sus defensas en torno a la querrella presentada. transcripción de la prueba oral (TPO) de 1 de noviembre de 2019, testimonio del profesor Torres Bauzá, págs. 15-17.

⁸⁸ Artículo IX (I) de la Certificación Núm. 130.

⁸⁹ Esta fue la misma conclusión a la cual arribó el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico en el caso civil número 19-1762 (RAM), el cual fue instado el 3 de junio de 2021 por el doctor **Arana Santiago** contra la Universidad de Puerto Rico en Utuado y doctor Luis Tapia Maldonado.

Entendemos que, el Oficial Examinador a cargo de dicho proceso *formal*, erró al admitir de manera limitada la declaración jurada de la estudiante Génesis Vélez Feliciano por esta ser prueba de referencia de conformidad con las mencionadas reglas.⁹⁰ Sin embargo, luego de un minucioso examen de la transcripción de la prueba oral (TPO), somos del criterio de que los testimonios vertidos por los tres (3) estudiantes sostienen las alegaciones contenidas en dicho documento. Por lo cual, razonablemente se entiende que la estudiante Vélez Feliciano fue víctima de acercamientos verbales y físicos insinuantes, no deseados, en el salón de clases y durante el transcurso del curso por parte del doctor **Arana Santiago**. También, que, en todo momento, dicha conducta fue rechazada por la estudiante Vélez Feliciano, al extremo de tener que abandonar el curso. Reiteramos que esto es una inferencia razonable de los hechos básicos que surgen de la totalidad de la prueba presentada ante el foro administrativo, por lo que la decisión de la **Junta de Gobierno** merece deferencia de parte de este tribunal.⁹¹

Además, conforme a lo pautado por la *Política contra el Hostigamiento Sexual de la UPR*, la institución del estado tiene un deber de proteger a sus estudiantes contra cualquier tipo de conducta constitutiva de hostigamiento sexual o conducta que pueda lacerar la dignidad de ellos. Esto, en cumplimiento con sus poderes de razón de estado, los cuales buscan promover un ambiente seguro donde prospere el aprendizaje y el desarrollo personal de los estudiantes.

Del mismo modo, no nos convence el argumento del doctor **Arana Santiago**

⁹⁰ Cabe destacar que la estudiante Génesis Vélez Feliciano estuvo disponible para prestar su testimonio de manera virtual, pero el Oficial Examinador **no** autorizó su intervención de este modo.

⁹¹ *Otero v. Toyota, supra.*

de que el Rector de la **UPRU** no basó su decisión en el expediente. Específicamente, arguye que este emitió hechos adicionales que no estaban alegados en la querrela administrativa y por ello no tuvo la oportunidad de prepararse adecuadamente para rebatirlas.

Se debe aclarar que el procedimiento administrativo de la **UPR** culmina con la decisión de la institución luego de un proceso adjudicativo *formal* en el cual intervienen varias personas con distintas funciones. Por ejemplo, la autoridad nominadora designa a un Oficial Examinador para atender y recibir la prueba, pero este rinde un informe con sus recomendaciones, el cual es revisado por la autoridad nominadora quien no tiene que acogerlo en su totalidad si no lo considera correcto. De hecho, la institución es a la que le corresponde adjudicar finalmente la controversia de acuerdo con el récord administrativo.⁹²

En el presente caso, el Rector, como autoridad nominadora analizó minuciosamente las recomendaciones del Oficial Examinador. Sin embargo, descartó las conclusiones de derecho del informe aludido al considerarlas “contrarias al estado de derecho existente en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y a la Política Pública de cero tolerancia contra actos de Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico y los reglamentos universitarios”.⁹³ Resolvemos que esta acción es cónsona con sus facultades institucionales. De igual manera, el Reglamento General de la **UPR** autoriza al Rector imponer la destitución del doctor **Arana Santiago**, como una sanción progresiva. Más aun, cuando éste había sido

⁹² *UPR Aguadilla v. Lorenzo Hernández*, *supra*, pág. 1012.

⁹³ Véase Apéndice, pág. 113.

encontrado responsable por conducta similar en el 2012. En aquella ocasión el doctor **Arana Santiago** fue suspendido por un término de seis (6) meses.⁹⁴

En consecuencia, entendemos que la decisión tomada por el Rector fue una justificada. La misma fue razonable y está sustentada por la prueba que obra en el expediente. El referido dictamen se amparó en el cumplimiento con el deber de la **UPR**, de mantener un ambiente de enseñanza libre de conductas violentas para con sus estudiantes. De modo que, el doctor **Arana Santiago** no pudo derrotar la presunción de corrección ni corroborar que la decisión mediante la cual fue destituido fuera irrazonable y/o no sustentada en la evidencia presentada como tampoco fuese caprichosa, ilegal o arbitraria, o constituyera un abuso de discreción por parte del Rector. Por lo tanto, resolvemos que estas son meras alegaciones que no constituyen prueba.⁹⁵ Ante ello, brindamos la debida deferencia al organismo administrativo y nos abstendremos de intervenir con la *Decisión* recurrida.

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, *confirmamos* la *Decisión* intimada el 29 de abril de 2021 por la **Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico**.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

f/ Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
Secretaria del Tribunal de Apelaciones

⁹⁴ Este hecho fue traído por el propio doctor **Arana Santiago** en su *Contestación a la Notificación del 16 de Diciembre de 2018 sobre Formulación de Cargos por Violación a las Políticas Institucionales sobre Hostigamiento Sexual*. Apéndice, pág. 38.

⁹⁵ *UPR Aguadilla v. Lorenzo Hernández, supra*, pág. 1013.

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
GENERAL COURT OF JUSTICE
COURT OF APPEALS
SPECIAL PANEL

**DR. LUIS S. ARANA
SANTIAGO**
APPELLANT(S)

KLRA202100375

***Review of Administrative
Decision*** issued by the University
of Puerto Rico, Governing Board
of UPR

V.

Civil No.:
JG 20-08

**DR. LUIS TAPIA
MALDONADO,
RECTOR OF THE
UNIVERSITY OF
PUERTO RICO IN
UTUADO; DR. JORGE
HADDOCK ACEVEDO,
PRESIDENT OF UPR;
GOVERNING BOARD
OF UPR**
APPELLEE(S)

Re:
Disciplinary Action

Panel composed by its president, Judge Bermudez Torres, Judge Rivera Marchand, Judge Barresi Ramos and Judge Mateu Melendez

Barresi Ramos, Presenting Judge

S E N T E N C E

In San Juan, Puerto Rico, today, June 08, 2023.

Appearing before this Court of Appeals, **Dr. Luis Arana Santiago** (Dr. **Arana Santiago**), on his own behalf, through an appeal filed on July 14, 2021. Requesting in writing that we review the *Governing Board's Decision to Appeal (Decision)* issued on May 5, 2021, by the **Governing Board of the University of**

Identifying Number:
SEN2023 _____

Puerto Rico (Governing Board).¹ Through this *Decision*, the **Governing Board** declared the appeal inadmissible and confirmed the determination of Dr. **Jorge Haddock Acevedo**, president of the **University of Puerto Rico (UPR)**, as decreed on October 8, 2020. In other words, the opinion of Dr. **Luis A. Tapia Maldonado**, Rector of the **University of Puerto Rico in Utuado (UPRU)**, issued on December 20, 2019, in which it was resolved to remove Dr. **Arana Santiago** from his position as professor and separate him from any link with **UPR**.

We present the factual and procedural background that accompanies the present dispute.

- I -

Dr. **Arana Santiago** was a professor at **UPRU**. During the second semester of academic year 2017-2018, he taught the MATE 3012 course.² On May 23, 2018, in the afternoon, several students enrolled in the aforementioned class went to the Student's Ombudsman Office (SA) where they filed a complaint regarding Dr. **Arana Santiago's** performance in the classroom. The SA instructed the students to submit their claims in writing to the Deanery of Academic Affairs.³ The next day, during morning hours, the students went to the offices of the Dean of Academic Affairs and filed a written complaint with Ms. Vivian Velez Vera (Dean Velez Vera), Acting Dean.⁴

¹ This determination was notified and filed on May 13, 2021. See Appendix, pp. 337-339.

² The record shows that this semester began during the month of February 2018, as the start was delayed due to Hurricane Maria.

³ See Appendix, p. 353.

⁴ The students expressed the following:

In response to the students' complaint, Dean Velez Vera summoned the students for a meeting with Mrs. Maria C. Rodriguez Sierra, Dean of Students (Dean Rodriguez Sierra).⁵ The students as a group were consistent in expressing that Dr. **Arana Santiago**: (1) was going to fail the entire group in the course; (2) made derogatory comments to the group about its performance in the course; and, (3) made improper remarks, with strong connotations directed at the student Genesis Velez Feliciano. In addition, they emphatically requested an intervention in the matter and for prioritized or precautionary measures to be taken. As part of the aforementioned meeting, minutes were drafted.⁶

That same day, Dean Velez Vera and Dean Rodriguez Sierra met with the student, Genesis Velez Feliciano, in private. She testified regarding the inappropriate behavior of Dr. **Arana Santiago** toward her person.⁷ In particular, she stated that Dr. **Arana Santiago** frequently commented that she seemed to like strong men and expensive cars; and seemed to like parties. She stated that, on one occasion, Dr. **Arana Santiago** brought his face close to hers. She added that he continually expressed to her that maybe she believed that her boyfriend could solve mathematical problems in his mind. Ms. Velez Feliciano stressed that Dr. **Arana**

"The classroom environment is totally uncomfortable due to inappropriate comments and insinuations directed at the ladies in the classroom, and the group in general also received derogatory comments. The classmate Genesis Velez has been the most harmed in this situation due to the constant comments and gestures directed at her person, making her feel uncomfortable in front of the group. We are extremely concerned about this situation because there are graduates in the group and colleagues who need this class as a requirement to transfer to another campus. We hope that the situation is addressed as soon as possible, and that the necessary actions (sic) are taken." See Appendix, p. 6.

⁵ *Id.*, p. 354. See also, transcript of Oral Evidence (TPO, Spanish acronym) of 31 October 2021, testimony of Dean Velez Vera, pp. 38-39.

⁶ See Appendix, pp. 7-9.

⁷ *Id.*, pp. 13-15.

Santiago's gestures and expressions were not welcome. She also expressed that she was afraid to personally express to **Dr. Arana Santiago** her discomfort at such attitudes toward her person. She stated that she was interested in filing a formal complaint.

The same day, in the afternoon, both Deans met with **Dr. Arana Santiago** and informed him that the purpose of the meeting was to expose the complaints received from the students about his statements directed at the student Velez Feliciano as well as his comments directed to the rest of the group of students, which have created a hostile environment in the classroom.⁸ For her part, Dean Velez Vera explained to **Dr. Arana Santiago** that she would give him a copy of the minutes with a summary of what had happened at the meeting so that he could have the opportunity to defend himself against the aforementioned complaints.⁹

That same night, the Deans contacted Mrs. Marisol Diaz Ocasio, the Student Attorney (SA), to inform her about the events that took place between **Dr. Arana Santiago** and the students.¹⁰

Thus, on June 4, 2018, the Deans, Professor Jorge Torres Bauza, director of the Department of Natural Sciences, and immediate supervisor of **Dr. Arana Santiago**, met with the student Velez Feliciano and the other students. Ms. Velez Feliciano gave a statement against **Dr. Arana Santiago** that was signed by the SA,

⁸ *Id.*, p. 356. *See*, also, transcript of oral evidence (TPO) of October 31, 2019, Testimony of Dean Velez Vera, p. 45.

⁹ *Id.*

¹⁰ Transcript of Oral Evidence (TPO) of November 1, 2019, Testimony of Student Attorney Diaz Ocasio (SA), p. 36.

the Deans and Professor Torres Bauza.¹¹ That same day, Professor Torres Bauza met with Dr. **Arana Santiago** and personally handed him a copy of the statement by student Velez Feliciano.¹² At the meeting, he was advised of his right to present his position or defenses regarding the complaint.¹³ After reading it, Dr. **Arana Santiago** denied the comments expressed therein.¹⁴

On June 5, 2018, student Velez Feliciano signed a Title IX sexual harassment form against Dr. **Arana Santiago**.¹⁵ Days later, on June 28, 2018, the Rector of UPRU met with Dr. **Arana Santiago** and reiterated that he was the subject of an investigation due to a complaint filed by the student Velez Feliciano.¹⁶ Likewise, he reminded him that on a previous occasion he was found liable in a sexual harassment investigation at the university. Due to that case, Dr. **Arana Santiago** [was] suspended for six (6) months.¹⁷

On July 11, 2018, the student Velez Feliciano submitted an affidavit regarding the acts committed by Dr. **Arana Santiago**.¹⁸

On August 8, 2018, Dr. **Arana Santiago** took sick leave. Subsequently, on August 16, 2018, the SA and the Deans, submitted a report to the Acting Rector of the institution regarding the sexual harassment complaint against Dr. **Arana**

¹¹ See Appendix, p. 11.

¹² *Id.*, p. 358.

¹³ *Id.*

¹⁴ *Id.*

¹⁵ *Id.*, pp. 17-18. In this document, Ms. Velez Feliciano alleged that she was removed from the classroom and was interested in Dr. **Arana Santiago** being admonished so that this type of behavior would not happen again.

¹⁶ *Id.*, p. 23.

¹⁷ *Id.*, p. 360. See also the *Reply to the Notification of December 16, 2018, Regarding Charges Being Filed for the Violation of Institutional Policies on Sexual Harassment*, submitted by Dr. **Arana Santiago**, on p. 28.

¹⁸ See Appendix, pp. 20-21.

Santiago.¹⁹ In the aforementioned document, they concluded that **Dr. Arana Santiago** committed acts that constitute sexual harassment under the hostile environment clause prohibited under Title IX. They also recommended, based on the body of evidence collected, for an investigation on the matter to be initiated and for the Institutional Sexual Harassment Policy to be enforced.

Finally, on October 12, 2018, Dr. Jose L. Heredia Rodriguez, acting Rector of UPRU, signed the Indictment against **Dr. Arana Santiago**.²⁰ The charges brought against him alleged violations of Articles VIII(A)(1), (A)(2), (A)(3), (B)(1) and (B)(2) of the *Institutional Sexual Harassment Policy at UPR*, Certification Number 130 (2014-2015) and §§ 35.2.8 and 35.2.19 of UPR General Regulations. It summarized the facts that gave rise to the charges, the evidence to be presented by UPR; which consisted of the student testimonies, **Dr. Arana Santiago's** right to be legally represented during the process; the disciplinary sanctions that could be imposed on him if the charges alleged against him were proved; and the term of fifteen (15) days to answer the allegations. Likewise, **Dr. Arana Santiago** was informed that the case had been referred to the Examining Officer. Also, the letter indicated that the *formal* administrative process began when the charges were filed.

For his part, **Dr. Arana Santiago** submitted a reply to the *Notification of December 16, 2018, on the Filing of Charges for Violation of Institutional Policies on*

¹⁹ *Id.*, pp. 1-2. The following documents supporting the allegations were included with their report: 1) Title IX Case Referral, 2) the written complaint by the MATE 3012 course students, 3) the minutes for the meetings with the students, Ms. Genesis Velez Feliciano and the attendance log for both meetings, 4) the statement by Ms. Velez Feliciano, 5) the Title IX form, 6) an affidavit by the student Velez Feliciano, and 6) a copy of the attendance log for the meeting between **Dr. Arana Santiago** and Dean Velez Vera.

²⁰ See Appendix, pp. 24-33. The aforementioned letter was notified to **Dr. Arana Santiago**, on December 16, 2018.

Sexual Harassment. In his response allegation, he denied the alleged facts and requested to have the charges dismissed.²¹ In addition, he argued that there were irregularities in the informal process established in Article IX of Certification No. 130. Among these, that: 1) the SA did not inform him that he was under investigation; 2) he was not allowed to offer his version of the facts and present his affirmative and mitigating defenses; 3) an affidavit was not required of him; 4) he did not participate in the SA's investigation; and 5) he was not given the opportunity to examine the report that the SA sent to the Acting Rector of UPRU, among others.

After several procedural formalities, on October 30 and 31, 2019, and November 1, 2019, the evidentiary hearings were held before the Examining Officer. At these hearings, UPRU presented the testimony of three (3) of Dr. **Arana Santiago's** students: David A. Ureña Negrón, Esteban J. Tellado Zequeira, and Jann Romero Santiago. Dean Velez Vera, the SA, and the director of the Department of Natural Sciences, immediate supervisor of Dr. **Arana Santiago**, also testified. For his part, Dr. **Arana Santiago** did not provide testimonial evidence. The parties also submitted documentary evidence.

²¹ See Appendix, pp. 34-42. Dr. **Arana Santiago** filed a complaint with the Federal Court for the District of Puerto Rico. See: 19-1762 (RAM) case in which he unsuccessfully sought the disqualification of the Judge who was hearing the case before the court because he had legally represented UPR in an earlier unrelated case; Subsequently, he requested an Injunction in order to stop the administrative investigation process against him. Finally, on June 3, 2021, in case 19-2128, Judge Silvia Carreno-Coll issued an *Opinion and Order* by which she declared the *Motion to Dismiss* that was filed by Mr. Tapia Maldonado, Mr. Heredia Rodriguez and others; and she dismissed the case before the Federal Court for the District of Puerto Rico because it was still being heard in the State Court.

On November 26, 2019, the Examining Officer issued his *Report of the Examining Officer (Report)* which contained his factual findings, legal conclusions and recommendations to dismiss the charges alleged against Dr. **Arana Santiago**.²² In particular, it resolved that the informal process established in Certification No. 130 was not carried out in an adequate and timely manner. In addition, he established that the students attributed their bad grades in the course to Dr. **Arana Santiago** for not fulfilling his role as a teacher and not to his behavior or expressions directed at the student Velez Feliciano. Likewise, he said that the file did not show that the student Velez Feliciano indicated that the attitudes of Dr. **Arana Santiago** unreasonably interfered with her studies. As such, he concluded that:

Nor do we understand that the classroom conduct and expressions of the Respondent can reasonably be understood as creating a sufficiently hostile, intimidating, or offensive environment that would constitute sexual harassment. Although we understand that the behavior and expressions of the Respondent could be considered to be in bad taste and/or inappropriate for a classroom, we believe that these are not serious enough or have the sexual connotation to be perceived as sexual harassment by any other reasonable student. Appendix, pp. 109-110.

On December 20, 2019, Dr. Luis A. Tapia Maldonado, the Rector, issued his resolution in which he accepted the factual findings contained in the *report*.²³ He also issued additional determinations of proven facts, and concluded that Dr. **Arana Santiago** incurred violations of Articles VIII(A)(3) and (B)(2) of the Sexual Harassment Policy. He specified that the findings made by the Examining Officer

²² See Appendix, pp. 69-111.

²³ *Id.*, pp. 112-146.

were contrary to the Law and to UPR's Sexual Harassment Policy and its institutional regulations. In his analysis, the Rector concluded that:

Upon examination of the totality of the facts reported together with the subjective and objective parameters established, we can conclude that the behavior of the Respondent was explicit and implicit, both verbal and physical, and created an intimidating, hostile, and offensive environment in the classroom, as perceived and reiterated by the students and by the student Genesis Velez Feliciano, and therefore constituted discriminatory behavior which amounted to sexual harassment. Appendix, pp. 143-144.

Thus, he decreed the immediate dismissal of Dr. Arana Santiago as professor of UPR and disqualified him from serving the institution.

Unsatisfied with this determination, Dr. Arana Santiago filed an Administrative Appeal with the Office of the President of UPR.²⁴ In his letter, he reiterated that UPRU failed to comply with the procedure instituted under Certification No. 130 and they did not give him any participation whatsoever in the informal stage of the investigation. He also stated that he did not have the opportunity to cross-examine the student Velez Feliciano, since she did not appear at any hearing.

On October 8, 2020, Dr. Jorge Haddock Acevedo, the President of UPR, issued a *Resolution* adopting the *Report and Recommendations of the Examining Officer* and declared that the appeal was dismissed.²⁵ Additional factual determinations were issued with regard to the *Report*. Among these, Dr. Arana Santiago received timely notification of the existence of an investigation against him.

²⁴ See Appendix, pp. 148-167.

²⁵ *Id.*, pp. 188-232.

Consequently, on October 31, 2020, Dr. **Arana Santiago** appealed to the Governing Board of the University of Puerto Rico (Governing Board).²⁶ On April 29, 2021, the Governing Board decided to dismiss the appeal and confirmed the decision of Dr. Haddock Acevedo, president of **UPR**.²⁷ Likewise, he indicated that his determination is based on the report of the Examining Officer issued on March 16, 2021. In the aforementioned letter, he decreed that the fact that the student Velez Feliciano did not testify at the hearing did not prevent **UPRU** from proving her case in its entirety. He stated that:

[...]UPRU could not tolerate the Appellant's conduct, much less risk that it may worsen or be repeated, especially when, in the past, the appellant had had an earlier incident of sexual harassment which resulted in his suspension from employment and pay with the institution for six (6) months. Appendix, p. 401.

He also concluded that Dr. **Arana Santiago** engaged in immoral, offensive and humiliating conduct against the student Velez Feliciano and in violation of the constitutional principles of the right to study, as well as the public policy of the Law against Sexual Harassment in Educational Institutions, the University Act, [and] the relevant university regulations and procedures. He ruled that the dismissal of Dr. **Arana Santiago** from his position in the institution was justified, as well as his definitive separation from any link with the university.

On June 1, 2021, Dr. **Arana Santiago** presented a *Reconsideration*.²⁸ However, the **Governing Board** did not address it.

²⁶ *Id.*, pp. 233-336.

²⁷ On May 13, 2021, the **Governing Board**'s decision was notified. See , Appendix, pp. 337-406.

²⁸ See Appendix, pp. 407-429.

Still unsatisfied, on July 14, 2021, Dr. **Arana Santiago** appealed for an administrative review before this Court of Appeals. Therein, he points out the following error(s):

Dr. Luis Tapia Maldonado erred by categorizing the conduct alleged in the administrative complaint as sexual behavior. Consequently, **UPRU** erred when they initiated a sexual harassment investigation against the petitioner.

Dr. Luis Tapia Maldonado erred when he concluded that the subjective aspect of the investigation had been fulfilled, as established by the Honorable Supreme Court in the normative case **UPR-Aguadilla v. Jose Lorenzo Hernandez**, 2012 TSPR 57.

Dr. Luis Tapia Maldonado erred, having indicated that due process of law had been fulfilled.

The rector erred when he indicated that the protocol established in Certification 130 had been fulfilled.

Dr. Luis Tapia Maldonado erred in his appraisal of the testimonial evidence. The examining officer partially erred in his appraisal of the testimonial evidence.

Dr. Luis Tapia Maldonado erred when he did not realize the mendacity of Vivian Velez Vera and Marisol Diaz Ocasio.

Dr. Luis Tapia Maldonado erred when he found the petitioner guilty of violating the institutional policies against sexual harassment at the University of Puerto Rico and for committing immoral acts and, consequently, for dismissing him.

The rector erred with regard to the applicable law.

Dr. Luis Tapia Maldonado erred by continuing to process an administrative complaint that was evidently false.

Dr. Luis Tapia Maldonado erred when he did not consider the illicit change in the students' grades for the Mate 3012, m23 course in his Resolution.

Dr. Luis Tapia Maldonado erred when he dismissed the petitioner without having the required quantum of evidence.

UPRU erred by objecting to the testimony of Vivian Velez Vera and Marisol Diaz Ocasio regarding the illicit change in the students' grades for the Mate 3012, m23 course. The examining officer erred when he admitted said objection.

Dr. Luis Tapia Maldonado erred when he dismissed the petitioner when the administrative process had incurred in the errors covered in #1 through #12 as previously expressed and discussed.

On April 18, 2022, UPRU filed its Opposing Plea.

Having thoroughly evaluated the case file, counting on the benefit of the appearance of both parties, and having carefully studied the transcript of the stipulated oral evidence, we are in a position to resolve. We present the rules of law that are relevant to the raised dispute(s).

- II -

Because the points stated in error concern the same applicable law, we shall proceed to summarize them into two (2) key issues and discuss them together. Which are: (1) whether Dr. Arana Santiago's right to due process of law was violated during the administrative proceedings against him; and (2) whether the decision to remove him from his position as professor at UPRU, taken by Dr. Tapia Maldonado, was correct under the law.

- A -

The *Uniform Administrative Procedure Act* (LPAU, Spanish acronym) of the *Government of Puerto Rico* provides a body of minimum standards that govern the adjudication and regulatory processes for public administration.²⁹ Section 4.1

²⁹ Known as Law No. 38 of June 30, 2017, as amended, 3 LPRA §§ 9601-9713. *Saldanya Egozcue v. Junta*, 201 DPR 615, 621 (2018).

institutes a *judicial review* by this Court of Appeals for the agencies' final determinations.³⁰

The purpose of a *judicial review* is to limit the discretion that agencies have and ensure that they perform their functions in accordance with the law.³¹ The guiding criterion when passing judgment on an administrative forum's decision is how reasonable were the agency's actions.³² Our assessment of an agency's decision is limited, then, to determining whether an agency acted arbitrarily, illegally or unreasonably, or whether its actions constitute an abuse of discretion.³³

However, the decisions made by specialized administrative bodies enjoy a presumption of legality and correctness, so their conclusions and interpretations deserve great consideration and respect.³⁴ Therefore, in carrying out our review function, this Court must consider the agency's specialization and experience, distinguishing between questions with a statutory interpretation —on which the courts are specialists— and issues regarding discretion or administrative expertise.³⁵

The scope of the *judicial review* for an administrative determination is limited to the following: (1) whether the remedy granted by the agency was appropriate; (2) whether the agency's factual determinations are based on

³⁰ 3 LPRA § 9671.

³¹ *Torres Acosta v. Review Board*, 161 DPR 696, 707 (2004).

³² *Otero v. Toyota*, 163 DPR 716, 727 (2005). D. Fernandez Quiñones, *Administrative Law and Uniform Administrative Procedures Act*, 2nd ed., Bogota, Ed. Forum, 2001, p. 543.

³³ *Torres Acosta v. Review Board*, *supra*, p. 708.

³⁴ *Garcia Reyes v. Cruz Auto Corp.*, 173 DPR 870, 891 (2008); *Murphy Bernabe v. Superior Court*, 103 DPR 692, 699 (1975).

³⁵ *Adorno Quiles v. Hernandez*, 126 DPR 191, 195 (1990).

substantial evidence as established in the administrative record, and (3) whether the legal conclusions were correct.³⁶

Factual determinations shall be upheld by the courts if they are supported by *substantial evidence* arising from the administrative record being considered as a whole.³⁷ *Substantial evidence* is that which is relevant and which a reasonable mind can accept as adequate to support a conclusion.³⁸ Due to the presumption of regularity and correctness that covers the decisions that are issued by administrative agencies, anyone who alleges the absence of *substantial evidence* must provide sufficient evidence to defeat said presumption.³⁹ To do so “you must prove that the record contains other evidence that reduces or undermines the evidentiary value of the contested evidence, to the extent that it cannot be concluded that the agency’s determination was reasonable in accordance with the totality of the evidence before it.”⁴⁰ This is known as the rule of *substantial evidence*, which seeks to avoid replacing the criterion of the specialized administrative body with the criterion of the reviewing court.⁴¹ Therefore, even if there is more than one reasonable interpretation of the facts, the court must defer to the agency, and not substitute the agency’s judgment with its own.⁴²

³⁶ Section 4.5 of the LPAU, 3 LPRA § 9675; *Torres Rivera v. PR Police*, 196 DPR 606, 627 (2016).

³⁷ *San Jorge Hospital Neighbors’ Association v. United Medical Corp.*, 150 DPR 70, 75 (2000).

³⁸ *Otero v. Toyota*, *supra*, p. 728.

³⁹ *Pacheco Torres v. Estancias de Yauco, SE*, 160 DPR 409, 431 (2003).

⁴⁰ *Gutierrez Vazquez v. Victor Hernandez*, 172 DPR 232, 244 (2007).

⁴¹ *Pacheco Torres v. Estancias de Yauco, SE, supra*, p. 432.

⁴² *Id.*

On the other hand, all aspects of an agency's legal conclusions are subject to review, notwithstanding any rule or criterion.⁴³ Even so, we must defer to how administrative bodies interpret the laws and regulations they administer.⁴⁴ In light of this, "[even] in questionable cases where the agency's interpretation is not the only reasonable one, the agency's determination deserves substantial deference."⁴⁵

As a whole, if the contested decision is reasonable and supported by *substantial evidence* in the administrative file, its confirmation is appropriate. However, review courts may intervene in the contested decision when it is not based on *substantial evidence*, or when the action taken is arbitrary, unreasonable or illegal, or when it affects fundamental rights.⁴⁶

Regarding the applicability of the Rules of Evidence in the adjudication processes for administrative agencies, the LPAU and its interpretative jurisprudence have established that such standards are not included, as a general rule, as the intent is for fairness to prevail without the procedural obstacles of the courts of justice (quotations omitted).⁴⁷ Our administrative legal system allows these processes to be agile and simple with the purpose of achieving a quick, fair and economic solution.⁴⁸

⁴³ *Rebollo v. Yiyi Motos*, 161 DPR 69, 77 (2004).

⁴⁴ *Torres Santiago v. Department of Justice*, 181 DPR 969, 1002 (2011).

⁴⁵ *Id.*

⁴⁶ *Planning Board v. Cordero Badillo*, 177 DPR 177, 187 (2009).

⁴⁷ *Otero v. Toyota*, *supra*, p. 733, citing *Martinez v. Superior Court*, 83 DPR 717, 720 (1961). See also 3 LPRA § 2163.

⁴⁸ *Id.* In *Otero v. Toyota*, the administrative agency admitted into evidence a report that found the defects in a motor vehicle, which was referenced as evidence. The Supreme Court of Puerto Rico ruled that the rules of evidence do not apply to administrative proceedings and the administrative forum could admit it. In addition, it concluded that the aforementioned report corroborated the defects that the agency's technician found in the car concerned.

- B -

The Bill of Rights of our Constitution states that, “[n]o person shall be deprived of their liberty or property without due process of law, nor shall anyone in Puerto Rico be denied equal protection under the law.”⁴⁹ Likewise, the Constitution of the United States provides that, “[n]o person [...] shall be deprived of their life, liberty or property, without due process of law.”⁵⁰ Furthermore, Amendment 14 establishes that [n]o state shall deprive any person of their life, liberty or property without due process of law, nor shall anyone, within its jurisdiction, be denied equal protection under the law.”⁵¹ The aforementioned constitutional clauses were enacted with the purpose of preventing the government from abusing its powers and from using them as instruments to oppress the citizenry.⁵² The postulate of due process of law has been defined as the “right of every person to have a fair process and with all of the guarantees offered by law, in judicial as well as in administrative forums”.⁵³ This constitutionally enshrined right operates on two (2) aspects: procedural and substantive.⁵⁴ In the substantive aspect, this doctrine seeks to protect and safeguard the fundamental rights of individuals.⁵⁵ On the other hand, the procedural aspect, “imposes upon the State the obligation to ensure that interference with the individual’s interests in freedom and property is done through

⁴⁹ Art. II, § 7, ELA Const.

⁵⁰ Amd. V, US Const.

⁵¹ Amd. XIV, US Const.

⁵² *Rodriguez Rodriguez v. ELA*, 130 DPR 562, 575 (1992).

⁵³ *Ports Auth. v. HEO*, 186 DPR 417, 428 (2012).

⁵⁴ *Ind. Emp. A.E. P. v. A.E.P.*, 146 DPR 611, 616 (1998).

⁵⁵ *Id.*

a fair and equitable procedure.”⁵⁶ The procedural aspect recognizes several guarantees that constitute due process of law. Among them: (1) allowing a preliminary hearing; (2) an adequate and timely notification; (3) the right to be heard; (4) the right to confront the opposing witnesses; (5) the right to provide oral and written evidence in their favor; and (6) the presence of an impartial adjudicator.⁵⁷ Because administrative bodies resolve disputes that could intervene in an individual’s interests in property or freedom, our legal system has extended the aforementioned guarantees to administrative procedures. However, in administrative forums, due process of law is more lax than in court proceedings.⁵⁸ What we have been emphatic about is that, “the award procedure must be fair and equitable.”⁵⁹ Section 3.1 of LPAU provides that, when adjudicating a dispute, agencies must safeguard the following rights for the parties: (1) timely notice of charges or complaints or claims against a party; (2) provide evidence; (3) an impartial judgment, and (4) a decision based on the record.⁶⁰ The foregoing is a corollary of the aforementioned right to due process of law guaranteed in our Constitution.

- C -

The Supreme Court of Puerto Rico has reiterated that career public employees hold a proprietary interest in their jobs, and therefore, they are creditors

⁵⁶ *Id.*

⁵⁷ *Vendrell Lopez v. AEE*, 199 DPR 352, 359 (2017).

⁵⁸ *Baez Diaz v. ELA*, 179 DPR 605, 623 (2010).

⁵⁹ *Id.*

⁶⁰ 3 LPRA § 9641.

of due process of law.⁶¹ That said, in public employment, the aforementioned guaranty to due process of law must be applied before both the salary or the employee's permanence in their position can be affected.⁶² These guarantees are made clear through the notification of disciplinary charges, by holding a formal administrative hearing by which the employee is given the opportunity to be heard, to examine the evidence against them and to present evidence in their favor, and at in said hearing, the determination is made based on the content of the employee's file and is issued by an impartial judge.⁶³ Now then, "the constant jurisprudence of the U.S. Supreme Court and that of Puerto Rico is clear in the sense that the exercise of property rights is not absolute. It is subject to social interests that are grouped into the concept of '*overriding state power*' or '*police power*'."⁶⁴

- D -

The *Law to Prohibit Sexual Harassment in Educational Institutions* provides for all matters regarding the sexual harassment of students in educational institutions, including at university levels.⁶⁵ This legislation aims to prohibit the sexual harassment of students in order to safeguard an environment conducive to their personal development and learning.⁶⁶ The aforementioned statute defined what constitutes sexual harassment in these institutions and recognized that it was

⁶¹ *Torres Solano v. PRTC*, 127 DPR 499 (1990).

⁶² *Id.*

⁶³ *Lupiañez v. Sec. of Education*, 105 DPR 696 (1977).

⁶⁴ Our highest forum has defined the national interests as, "[s]uch powers as are *inherent in the state that is used by the Legislature* to prohibit or regulate certain activities for the purpose of promoting or protecting public peace, morals, health and *the general welfare of the community*, which can be delegated to the municipalities." *Dominguez Castro v. ELA*, 178 DPR 1, 36 (2010).

⁶⁵ Known as Law No. 3-1998. 3 LPRA §§ 149a and s.s.

⁶⁶ *UPR Aguadilla v. Lorenzo Hernandez*, 184 DPR 1001, 1021 (2012).

the public policy of the State to ensure that students—children, youths and adults—have the right to pursue their studies free from the pressure of sexual harassment.⁶⁷ In light of this, the student was provided with a variety of remedies, among which are, to be compensated for damages; to be reinstated in their studies; to file a complaint with the institution; to file a civil complaint with the Court of First Instance (CFI); and to request an injunction to do or to desist.⁶⁸

Likewise, this legislation imposed different obligations upon educational institutions, with the purpose of preventing, discouraging and avoiding this type of conduct, as well as the civil liability for acts that constitute sexual harassment.⁶⁹ Regarding the actions of their teaching and non-teaching staff, which constitute said harassment, it was established that they shall be liable, “regardless of whether the specific acts that are subject to controversy were or were not prohibited by the educational institution, and regardless of whether the institution and its teaching and non-teaching staff knew or should have known that said conduct was prohibited.”⁷⁰ In its Statement of Grounds, the *Act to Prohibit Sexual Harassment in Educational Institutions, supra*, warns that the conduct of harassment is varied, including, but not limited to: verbal harassment; lewd looks; inappropriate comments; touching; pressure and invitations with sexual content; implicit demands for sexual favors, and physical attacks.⁷¹

⁶⁷ 3 LPRA §§ 149a and 149b(a).

⁶⁸ 3 LPRA § 149j.

⁶⁹ 3 LPRA §§ 149e-149i.

⁷⁰ 3 LPRA § 149e. *UPR Aguadilla v. Lorenzo Hernandez, supra*, pp. 1017-1018.

⁷¹ Statement of Grounds for *Law 3-1998, supra*.

For its part, our Supreme Court has stated that sexual harassment can be expressed in such subtle manifestations as: unwelcome compliments, winks and sexual insinuations.⁷² This conduct, among others, was recognized as a form of sexual harassment by hostile environment. This practice is prohibited under Law No. 3-1998, *supra*. This occurs when a person's sexual conduct is intended to intimidate, threaten the student or unreasonably interfere with their academic performance or when the sexual conduct makes the academic environment intimidating, offensive or hostile. As resolved in *UPR Aguadilla v. Lorenzo Hernandez, supra*, and Law No. 3-1998, *supra*, “the totality of the circumstances in which the events occurred shall be considered to determine whether the alleged conduct or unwanted advances constitute sexual harassment.”⁷³ In summary, while analyzing the conduct in dispute, it is necessary to examine the totality of the circumstances in each case, to determine whether the conduct can reasonably be construed as threatening, intimidating and unreasonably interfering with their studies or creates a sufficiently hostile, intimidating or offensive environment for the student.⁷⁴

Likewise, **UPR** has its own Sexual Harassment Policy. It institutes a special process through which sexual harassment complaints are addressed in cases where the complaint leads to an investigation resulting in just cause to impose disciplinary

⁷² *Sanchez v. A.E.E.*, 142 DPR 880, 884 (1997).

⁷³ 3 LPRA § 149d.

⁷⁴ *UPR Aguadilla v. Lorenzo Hernandez, supra*, 1024-1025.

sanctions on the accused.⁷⁵ This policy provides that the process begins with a complaint, which, if filed by a student, must be referred to the Office of the Student Attorney or the Dean of Students. The party against whom the complaint is brought shall be informed of the allegations against them; may state their position and defenses; but it will not be necessary to offer them all of the guarantees offered by the due process of law that is recognized in formal proceedings.⁷⁶

Finally, if charges are filed against the respondent, a formal process shall be initiated. This formal process provides for the respondent to be notified of the charges against them; who may answer the complaint; and the hearing is held before an Examining Officer that allows the respondent to confront the evidence against them and present evidence in their favor.⁷⁷ It also provides that, upon completion of the hearing, the designated Examining Officer shall submit a written report to the appointing authority of the respondent's institution which shall contain: "(1) A list of the proven facts; (2) A list of their legal findings, and (3) A recommendation for the resolution of the case."⁷⁸ Once the report of the Examining Officer is submitted, the appointing authority shall analyze the case and the report

⁷⁵ See Article IX (C), *Institutional Sexual Harassment Policy at the University of Puerto Rico*, Certification No. 130 (2014-2015) by the Governing Board of the University of Puerto Rico. Furthermore, the aforementioned Policy allows the institution to continue with the process of investigation, even if the complainant does not participate in it or decides to withdraw the complaint. Article IX(J). It also empowers the university to take any interim measures that are possible and desirable within this informal process to protect the claimant more promptly. Article IX(G).

⁷⁶ *Id.*, Article IX(I) provides: The person against whom a complaint is filed will be given the opportunity to be informed of the allegations against them, to state their position and defenses. Provided, however, that at this stage of the proceedings there shall be no right to the guarantees recognized in formal proceedings as due process of law. However, they may be accompanied by a lawyer when they attend the meeting.

⁷⁷ *Id.*, Article XI (A).

⁷⁸ *Id.*, Article XIV.

and impose such disciplinary sanctions as are deemed appropriate. The decision shall, for its part, be notified to the respondent together with his right to appeal.⁷⁹

Specifically, Article XV of Certification No. 130 (2014- 2015) on the Appointing Authority states:

The appointing authority of the respondent's institutional unit **shall decide the case after evaluating the report of the Examining Officer and shall impose disciplinary sanctions, if any, as appropriate**; pursuant to the General Regulations of the University of Puerto Rico or the General Regulations for Students. They shall notify the respondent in writing and by registered mail with return receipt and shall advise them of their right to appeal the decision before the forum and within the terms specified in the university's regulations for appeal proceedings. The appointing authority shall inform the alleged victim of the final result in writing, by registered mail with return receipt.⁸⁰ (Emphasis ours.)

Likewise, our Highest Forum has clarified that the appointing authority retains its power to make decisions, even if it has appointed an Examining Officer to address the complaint and receive evidence.⁸¹ While exercising it, they do not have to accept the entire report by said adjudicator if they do not consider it to be correct.⁸² What is [e]ssential to due process [is that the appointing authority makes] an informed decision based on its knowledge and understanding of the evidence presented, regardless of the means or mechanism by which that intelligence of the matter being debated was obtained (quotes omitted).⁸³

Regarding the sanctions, UPR's General Regulations (GR) allows for the penalization, with disciplinary actions, of acts that, under the canons of moral

⁷⁹ *Id.*, Article XV.

⁸⁰ *Id.*

⁸¹ *UPR Aguadilla v. Lorenzo Hernandez, supra*, p. 1011.

⁸² *Id.*

⁸³ *Id.*, citing *ADCVP v. Superior Court*, 101 DPR 875, 883 (1974).

responsibility that prevail in the community, constitute immoral conduct, as well as violations of University Law, the provisions of the aforementioned document, and other university regulations.⁸⁴ Dismissal is one of the corrective sanctions for non-compliance with these rules.⁸⁵ However, the GR provides for progressive disciplinary penalties, which may include a verbal warning, a written warning, suspension from employment and salary, for a defined term not to exceed six (6) months and, finally, dismissal.⁸⁶

- III -

The controversy before us requires us to decide, in first place, whether Dr. **Arana Santiago's** right to due process of law was violated during the process of investigation, which began with the sexual harassment complaint filed against him by one of his students, and in consequence, the University dismissed him from his position as a **UPRU** professor. Regarding this point of error, we disagree with Dr. **Arana Santiago's** position. From the case file before us, it appears that during the (*informal*) process of investigation and *formal* proceedings, his right to due process of law was not infringed. Consider.

It arises from the file before us, that during the informal process of investigation, Dr. **Arana Santiago** was given the opportunity to be involved in the process; he was notified of the allegations filed by his students; of the allegations and the complaint filed by the student Genesis Velez Feliciano, and was also

⁸⁴ General Regulations of the University of Puerto Rico, Certification No. 160 (2014-2015) Article 35, § 35.2.8 and 35.2.19.

⁸⁵ *Id.*, § 35.3.4.

⁸⁶ *Id.*, § 35.3.

allowed to express and defend himself, both verbally and in writing.⁸⁷ However, it should be noted that during this stage of the proceedings “there shall be no right to the guarantees recognized in formal proceedings as due process of law.”⁸⁸

Likewise, with the advent of the formal process of adjudication, **Dr. Arana Santiago** was duly and appropriately notified of the charges against him; he appeared, being represented by counsel; he participated in the administrative hearing; he was able to cross-examine **UPRU** witnesses; he submitted evidence in his favor; and the decision to remove him from his post was based on the file. Therefore, we must conclude that **Dr. Arana Santiago** was not deprived of his right to due process of law.⁸⁹

As for the other allegations of error attributed to the administrative forum by **Dr. Arana Santiago**, in which he claims that the decision to dismiss taken by the Rector of **UPRU** was contrary to Law, we conclude that we cannot support his position either. Consider.

As we have specified, in the processes of adjudication by administrative agencies, the Rules of Evidence do not apply, as a general rule. We understand that,

⁸⁷ According to the documents on file and the transcript of oral evidence (TPO). The Deans met with **Dr. Arana Santiago** to inform him that they received complaints from the students regarding his actions toward the student Genesis Velez Feliciano and the environment that existed in the classroom. See, Appendix, pp. 526-528; transcript of oral evidence (TPO) of October 31, 2021, testimony of Dean Velez Vera, pp. 45-46. Professor Torres Bauza, director of the Department of Natural Sciences, also met with **Dr. Arana Santiago**, gave him the statement provided by the student Velez Feliciano and advised him of his right to submit his defense regarding the filed complaint. transcript of oral evidence (TPO) of November 1, 2019, testimony of Professor Torres Bauza, pp. 15-17.

⁸⁸ Article IX (I) of Certification No. 130.

⁸⁹ This was the same conclusion that was reached by the Federal Court for the District of Puerto Rico in civil case number 19-1762 (RAM), filed on June 3, 2021, by **Dr. Arana Santiago** against the University of Puerto Rico in Utuado and **Dr. Luis Tapia Maldonado**.

the Examining Officer in charge of this *formal* process, erred to admit, in a limited way, the affidavit of the student Genesis Velez Feliciano, since this was out-of-court evidence under the aforementioned rules.⁹⁰ However, after a thorough examination of the transcript of oral evidence (TPO), we are of the opinion that the testimonies given by the three (3) students support the allegations contained in said document. Therefore, it is reasonably understood that the student Velez Feliciano was the victim of unwelcome and insinuating verbal and physical advances, in the classroom and throughout the course, by Dr. **Arana Santiago**. Also, that, at all times, said conduct was rejected by the student Velez Feliciano, to the extreme of having to leave the course. We reiterate that this is a reasonable inference from the basic facts that arise from the totality of the evidence presented before the administrative forum, so the decision of the **Governing Board** merits deference from this court.⁹¹

In addition, pursuant to the provisions of the *UPR Sexual Harassment Policy*, the state institution has a duty to protect its students from any conduct constituting sexual harassment or conduct that may harm their dignity. This, in compliance with their overriding state power, which seek to promote a safe environment where the students' learning and personal development can thrive.

Likewise, we are not convinced by Dr. **Arana Santiago's** argument that the Rector of **UPRU** did not base his decision on the file. Specifically, he argues that he issued additional facts that were not alleged in the administrative complaint and therefore did not have the opportunity to properly prepare to refute them.

⁹⁰ It should be noted that the student Genesis Velez Feliciano was virtually available to give her testimony, but the Examining Officer did not authorize her intervention in this way.

⁹¹ *Otero v. Toyota, supra.*

It should be clarified that UPR's administrative procedure culminated with the decision taken by the institution, after a formal process of adjudication, in which several people with different functions participated. For example, the appointing authority designates an Examining Officer to address and receive the evidence, but the Examining Officer provides a report with his recommendations, which is reviewed by the appointing authority who does not have to accept it in its entirety if it does not consider it to be correct. In fact, the institution is the one who must finally adjudicate the dispute according to the administrative record.⁹²

In this case, the Rector, as the appointing authority, thoroughly analyzed the recommendations made by the Examining Officer. However, he dismissed the legal conclusions of the aforementioned report, considering them "contrary to the rule of law that exists in the Commonwealth of Puerto Rico and to the Public Policy of Zero Tolerance against Acts of Sexual Harassment at the University of Puerto Rico and university regulations."⁹³ We resolve that this action agrees with their institutional faculties. Likewise, UPR's General Regulations authorize the Rector to impose the dismissal of Dr. **Arana Santiago**, as a progressive sanction. More so when he had been found liable for a similar conduct in 2012. On that occasion Dr. **Arana Santiago** was suspended for a term of six (6) months.⁹⁴

Consequently, we understand that the decision taken by the Rector was justified. It was reasonable and is supported by the evidence on record. The

⁹² *UPR Aguadilla v. Lorenzo Hernandez, supra*, p. 1012.

⁹³ *See* Appendix, p. 113.

⁹⁴ This fact was raised by Dr. **Arana Santiago** himself in his *Response to the Notification of December 16, 2018, on the Filing of Charges for Violation of Institutional Policies on Sexual Harassment*. Appendix, p. 38.

aforementioned opinion was grounded on UPR's duty to maintain an educational environment free of any violent conduct toward its students. Therefore, Dr. Arana Santiago could not defeat the presumption of correctness or corroborate that the decision by which he was removed was unreasonable and/or not supported by the evidence presented, nor was it capricious, illegal or arbitrary, or constitute an abuse of discretion by the Rector. We therefore resolve that these are mere allegations that do not constitute evidence.⁹⁵ In light of this, we give due deference to the administrative body and we will refrain from intervening with the *Decision* under appeal.

IV.

For the aforementioned reasons, *we confirm the Decision* issued on April 29, 2021, by the **Governing Board of the University of Puerto Rico**.

As agreed by the Court and certified by the Clerk of the Court of Appeals.

Ms. Lilia M. Oquendo Solis, Esq.
Clerk of the Court of Appeals

⁹⁵ *UPR Agudilla v. Lorenzo Hernandez, supra*, p. 1013.



CERTIFICATE OF ACCURACY

1. I certify this translation to be a word-for-word English translation of the original Spanish document. It was made by a competent translator, and to the best of my knowledge and ability, this translation is an accurate, true, authentic, and complete translation of the original language text.

2. On March 4th, 2024; the following document was translated:
 - A. SENTENCE; issued to DR. LUIS S. ARANA SANTIAGO; issued by the GENERAL COURT OF JUSTICE; COURT OF APPEALS; SPECIAL PANEL; COMMONWEALTH OF PUERTO RICO in SAN JUAN; and dated JUNE 8, 2023.

Amneris Quiñones
Amneris Quiñones
Lighthouse Translations

04/04/24
Date

Member of the American Translators Association
Corporate Number: 235968

APPENDIX B:
DENIAL OF RECONSIDERATION BY THE COURT OF APPEALS OF PUERTO RICO
SPANISH-ENGLISH

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
TRIBUNAL DE APELACIONES
PANEL ESPECIAL

DR. LUIS S. ARANA
SANTIAGO

KLRA202100375

Recurrente

v.

DR. LUIS TAPIA MALDONADO,
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE
LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
EN UTUADO;
DR. JORGE HADDOCK ACEVEDO,
PRESIDENTE DE LA UPR;
JUNTA DE GOBIERNO DE LA UPR

Recurrida

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Jueza Rivera Marchand, la Jueza Barresi Ramos y la Jueza Mateu Meléndez.

Revisión
Administrativa
Procedente de la
Universidad de
Puerto Rico, Junta
del Gobierno de la
UPR

Caso Núm.
JG 20-08

Sobre:
Acción
Disciplinaria

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de junio de 2023.

Considerada la Moción de Reconsideración presentada el 22 de junio de 2023 por el recurrente,

Dr. Luis S. Arana Santiago, se declara No Ha Lugar.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

/f Lcda. Lilia Oquendo Solís
Secretaria del Tribunal de Apelaciones

Número Identificador
RES2023_____

Commonwealth of Puerto Rico
COURT OF APPEALS
SPECIAL PANEL

DR. LUIS S. ARANA
SANTIAGO

Petitioner

v.

KLRA202100375

*Administrative
Review*
from the University
of Puerto Rico,
Governing Board of
the UPR

DR. LUIS TAPIA MALDONADO,
RECTOR OF THE UNIVERSITY
OF PUERTO RICO IN UTUADO;
DR. JORGE HADDOCK ACEVEDO,
PRESIDENT OF UPR; BOARD OF
REGENTS UPR

Respondents

Case No.
JG 20-08

Subject:
Disciplinary
Action

Panel composed of its president, Judge Bermúdez Torres, Judge Rivera Marchand, Judge Barresi Ramos and Judge Mateu Meléndez.

RESOLUTION

In San Juan, Puerto Rico, on June 26, 2023.

Having considered the Motion for Reconsideration presented on June 22, 2023 by the petitioner, Dr. Luis S. Arana Santiago, it is denied.

It was agreed by the Court and certified by the Secretary of the Court of Appeals.

/s Lcda. Lilia Oquendo Solís
Secretary of the Court of Appeals

Identification Number
RES2023_____

APPENDIX C:
APPEAL'S DENIAL BY THE SUPREME COURT OF PUERTO RICO
SPANISH-ENGLISH

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SALA DE DESPACHO I

Dr. Luis S. Arana Santiago

AC-2023-0057

Peticionario

v.

Dr. Luis Tapia Maldonado,
Rector de la Universidad de
Puerto Rico en Utuado;
Dr. Jorge Haddock Acevedo,
Presidente de la UPR;
Junta de Gobierno de la UPR

Recurridos

Sala de Despacho integrada por la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez, la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y los Jueces Asociados Señor Rivera García y Señor Estrella Martínez.

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de octubre de 2023.

Examinada la apelación presentada por la parte Peticionaria, se acoge como *certiorari*, por ser el recurso apropiado, y se provee **no ha lugar**.

Lo acordó el Tribunal y certifica el secretario del Tribunal Supremo.

[SELLO]

f/ Javier O. Sepúlveda Rodríguez
Secretario del Tribunal Supremo

IN THE SUPREME COURT OF PUERTO RICO
OFFICE ROOM I

Dr. Luis S. Arana Santiago

AC-2023-0057

Petitioner

v.

Dr. Luis Tapia Maldonado,
Rector of the University of
Puerto Rico in Utuado;
Dr. Jorge Haddock Acevedo,
President of the UPR;
Governing Board of the UPR

Respondents

Panel composed of Presiding Judge Oronoz Rodríguez, Associate Judge Mrs. Pabón Charneco and Associate Judges Mr. Rivera García and Mr. Estrella Martínez

RESOLUTION

In San Juan, Puerto Rico, on October 6, 2023.

Once the appeal presented by the Petitioner has been examined, it is accepted as *certiorari*, for it is the appropriate writ, and it is denied.

It was agreed by the Court and certified by the secretary of the Supreme Court.

[SEAL]

s/ Javier O. Sepúlveda Rodríguez
Secretary of the Supreme Court

APPENDIX D:
DENIAL OF FIRST RECONSIDERATION BY THE SUPREME COURT OF PUERTO RICO
SPANISH-ENGLISH

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SALA II

Dr. Luis S. Arana Santiago

AC-2023-0057

Peticionario

v.

Dr. Luis Tapia Maldonado,
Rector de la Universidad de
Puerto Rico en Utuado;
Dr. Jorge Haddock Acevedo,
Presidente de la UPR;
Junta de Gobierno de la UPR

Recurridos

Sala de Despacho integrada por el Juez Martínez Torres como su Presidente, y los Jueces Asociados señor Koltoff Caraballo, señor Filiberti Cintrón y señor Colón Pérez.

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de noviembre de 2023.

Examinada la primera moción de reconsideración presentada en este caso, se provee no ha lugar.

Lo acordó el Tribunal y certifica el secretario del Tribunal Supremo.

[SELLO]

f/ Javier O. Sepúlveda Rodríguez
Secretario del Tribunal Supremo

IN THE SUPREME COURT OF PUERTO RICO
ROOM II

Dr. Luis S. Arana Santiago

AC-2023-0057

Petitioner

v.

Dr. Luis Tapia Maldonado,
Rector of the University of
Puerto Rico in Utuado;
Dr. Jorge Haddock Acevedo,
President of the UPR;
Governing Board of the UPR

Respondents

Dispatch Chamber composed of Judge Martínez Torres as its President, and the Associate Judges Mr. Koltoff Caraballo, Mr. Filiberti Cintron and Mr. Colón Pérez.

RESOLUTION

In San Juan, Puerto Rico, on November 17, 2023.

Having examined the first motion for reconsideration presented in this case, it is denied.

It was agreed by the Court and certified by the secretary of the Supreme Court.

[SEAL]

s/ Javier O. Sepúlveda Rodríguez
Secretary of the Supreme Court

APPENDIX E:
DENIAL OF SECOND RECONSIDERATION BY THE SUPREME COURT OF
PUERTO RICO
SPANISH-ENGLISH

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SALA DE DESPACHO I

Dr. Luis S. Arana Santiago

AC-2023-0057

Peticionario

v.

Dr. Luis Tapia Maldonado,
Rector de la Universidad de
Puerto Rico en Utuado;
Dr. Jorge Haddock Acevedo,
Presidente de la UPR;
Junta de Gobierno de la UPR

Recurridos

Sala de Despacho integrada por la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez, la Jueza Asociada señora Pabón Charneco, el Juez Asociado señor Rivera García, y el Juez Asociado señor Estrella Martínez.

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 2 de febrero de 2024.

Atendida la *Segunda reconsideración* que presentó la parte peticionaria, se provee no ha lugar. Aténgase a lo resuelto por este Tribunal.

Lo acordó el Tribunal y certifica el secretario del Tribunal Supremo.

[SELLO]

f/ Javier O. Sepúlveda Rodríguez
Secretario del Tribunal Supremo

IN THE SUPREME COURT OF PUERTO RICO
OFFICE ROOM I

Dr. Luis S. Arana Santiago

AC-2023-0057

Petitioner

v.

Dr. Luis Tapia Maldonado,
Rector of the University of
Puerto Rico in Utuado;
Dr. Jorge Haddock Acevedo,
President of the UPR;
UPR Governing Board

Respondent

Panel made up of the President Judge Oronoz Rodríguez, the Associate Judge Mrs. Pabón Charneco, the Associate Judge Mr. Rivera García, and the Associate Judge Mr. Estrella Martínez.

RESOLUTION

In San Juan, Puerto Rico, on February 2, 2024.

Having considered the *Second reconsideration* presented by the petitioner, it is denied. Adhere to the ruling of this Court.

It was agreed by the Court and certified by the secretary of the Supreme Court.

[SEAL]

s/ Javier O. Sepúlveda Rodríguez
Secretary of the Supreme Court